

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 19º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-16210-2019
CARATULADO : ALBURQUERQUE/C. D. E.

Santiago, trece de Mayo de dos mil veintidós

VISTOS

Con fecha 14 de mayo de 2019, comparece don **CRISTIAN CRUZ RIVERA, MAGDALENA GARCÉS FUENTES, HUGO MONTERO TORO, BORIS PAREDES BUSTOS Y SEBASTIÁN VELÁSQUEZ DÍAZ**, abogados, domiciliados en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en nombre y representación de doña **CELSA PARRAU TEJOS**, chilena, viuda, enfermera, cédula de identidad N° 3.636.754-7, domiciliado en Av. Portugal N° 61, departamento 154, comuna de Santiago; de don **ERNESTO ANTONIO GUTIÉRREZ ZEGARRA**, chileno, casado, pensionado, cédula de identidad N° 5.012.224-7, domiciliado en Hernán Cortés N° 2.953, departamento 606, Ñuñoa; y de don **MARIO LEONARDO ALBURQUERQUE FUSCHINI**, chileno, casado, sociólogo, cédula de identidad N° 6.375.018-2. Domiciliado en calle Jesús N° 675 A, comuna de La Reina, y vienen en juicio de hacienda en demandar en contra de **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, a fin de que se acoja demanda y en definitiva, se declare: que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fueron sometidos, la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos) a cada uno de los demandantes **CELSA PARRAU TEJOS, ERNESTO GUTIÉRREZ ZEGARRA Y MARIO ALBURQUEQUE FUSCHINI**, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos.

Con fecha 21 de junio de 2019, la demandada contestó la demanda.

Con fecha 12 de septiembre de 2019, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 04 de octubre de 2019, se evacuó la dúplica de la demandada.

Con fecha 03 de diciembre de 2019, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 03 de noviembre de 2021, se tuvo por reactivado el término probatorio.



Foja: 1

Con fecha 02 de febrero de 2021, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la demandante, deduce la demanda de autos en base a los siguientes antecedentes:

I.- LOS HECHOS.

Los hechos descritos en este acápite han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (“Comisión Valech”), la que ha certificado la condición de ex detenidos políticos de nuestros representados. En efecto, Celsa Parrau tiene el número de registro 18.362; Ernesto Gutiérrez el 10.987 y Mario Alburquerque se consigna bajo el 694.

Si bien, sucintamente, se expondrá separadamente las circunstancias de la detención y torturas de cada uno de nuestros mandantes, debe señalarse que dos de ellos militantes del Partido Socialista y Mario Alburquerque militante del MAPU, actualmente militante socialista. Sus detenciones se produjeron en el año 1973 con posterioridad al golpe de estado y los tres permanecieron en algún momento en la Academia de Guerra Aérea, AGA, recinto que fue utilizado como centro de interrogatorios y torturas desde 1973 hasta fines de 1974.

I. 1. La Academia de Guerra Aérea como recinto de detención:

Tal como lo señalan los Informes de las Comisiones “Rettig” y “Valech”, formalmente este edificio institucional de la Fuerza Aérea de Chile estaba a cargo de la Fiscalía de Aviación, aunque en la práctica era dirigido por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Los detenidos al llegar recibían un número que los identificaba y eran mantenidos en el subterráneo, donde había salas de clases y baños que fueron habilitados como celdas. Los interrogatorios y torturas se practicaban en el segundo piso o en la capilla.

Entre las formas de torturas se encontraban golpes de todo tipo, enterrar objetos punzantes en las uñas, el colgamiento llamado “pau de arara”, aplicación de electricidad, vejámenes sexuales, simulacros de fusilamiento, “el submarino” y aplicación de pentotal.

Además, los detenidos eran sometidos a otros malos tratos. Por ejemplo, eran obligados a permanecer encapuchados por largo tiempo; a muchos de ellos se les colgaban letreros manuscritos con instrucciones para los guardias, tales como “sin comida ni agua durante 48 horas”, “de pie hasta nueva orden” y “sin dormir por 2 días”, entre otros.

I.2. Relatos individuales de los demandantes:

I.2.1. Las detenciones y torturas de Celsa Parrau:

Primera detención:

En septiembre de 1973, doña Celsa Parrau Tejos tenía 34 años, era enfermera y estaba casada con don Arnoldo Camú Veloso, abogado de 36 años, integrante de



Foja: 1

la Comisión Política del Partido Socialista y asesor de Presidencia. Tenía dos hijos, de 7 y 12 años. Fue detenida el 11 de septiembre de 1973 en INDUMET, fábrica que se encontraba intervenida y en proceso de estatización. En dicha fábrica, el día 11 los trabajadores decidieron permanecer luego de saber que se había producido el golpe de estado. Celsa llegó a Indumet con Arnoldo Camú cerca de las 10 de la mañana, a mediados del día Arnoldo y un grupo de sus compañeros rompen el cerco que carabineros había mantenido por varias horas y salen hacia la zona sur. En los momentos en que doña Celsa salía de la fábrica junto con su esposo y sus compañeros, les informaron que uno de sus compañeros había recibido un balazo, por lo que ella se quedó para curarlo, ya que esa su misión ese día, separándose desde ese momento de Arnoldo y su grupo.

Alrededor de las 18 horas, efectivos de Carabineros rompieron el portón de entrada de la fábrica con tanquetas, lanzaron bombas lacrimógenas y detuvieron a todos los presentes, entre los que se encontraba doña Celsa. Los obligaron a tenderse en el suelo, al tiempo que les propinaban golpes de pies (pateaduras), los pisaban y golpeaban con las culatas de sus armas. Acto seguido, los carabineros subieron a todos los detenidos a buses institucionales, les quitaron sus efectos personales (los que habían podido rescatar antes de la detención) y los trasladaron hasta la Comisaría de San Miguel. En este recinto los detenidos fueron separados por sexo. Las mujeres permanecieron en la Comisaría hasta alrededor de las 22 horas y posteriormente fueron conducidas hasta el Regimiento Tacna, ubicadas en un galpón y obligadas a permanecer sentadas en unas bancas sin respaldo. A intervalos, efectivos militares las atemorizaban y las insultaban. Les dieron una vez algo de comida durante los días en que estuvo detenida y debían que ir al baño acompañadas de un conscripto. Sólo interrogaron a una periodista de Radio Magallanes.

Carabineros no les informó el motivo de la detención, estaban retenidas por sólo por haber estado al interior de INDUMET. Durante su detención, logró ubicar a una compañera uruguaya.

En el Regimiento del Tacna pudo reconocer a algunos compañeros, que supo que pertenecía al grupo que había sido detenido en La Moneda: Claudio Jimeno, Enrique Huerta, Eduardo Paredes y otros más.

Doña Celsa fue mantenida detenida en el Regimiento Tacna hasta el día 14 de septiembre, fecha en que fue liberada con otros detenidos, cerca de 20 minutos antes de que se iniciara el toque de queda. No les devolvieron sus efectos personales, por lo que se encontraban sin dinero para movilización.

No sabía que había pasado con sus familiares, todos militantes y simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular, por lo que pensó que lo mejor era llegar al departamento de sus padres, ubicado en Portugal con Marcoleta, al que logró llegar caminando.

Al llegar donde sus padres, supo que su esposo Arnoldo había llamado, que estaba preocupado por ella, ya que habían quedado incomunicados, que él estaba bien y que volvería a llamar.

Segunda detención:



Foja: 1

El 24 de septiembre de 1973, en un falso enfrentamiento en la vía pública en el centro de Santiago, fue asesinado el esposo de doña Celsa, ARNOLDO CAMÚ VELOSO. Según se encuentra establecido judicialmente, su esposo fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia Naval y de Investigaciones y ejecutado al interior del vehículo en que era trasladado junto a Ernesto Gutiérrez, hacia el cuartel central de la Policía de Investigaciones. Don Ernesto Gutiérrez fue llevado a este recinto y Arnoldo Camú trasladado baleado a la Posta Central, donde se constató su muerte.

En la tarde del mismo día, el domicilio del matrimonio de Celsa Parrau y Ernesto Camú fue allanado por efectivos de la Fuerza Aérea. Celsa Parrau no estaba en su casa, pero una vecina informó a los agentes que ella se encontraba en la casa sus padres y les proporcionó la dirección. Así, cerca de las 21:00 horas se apersonaron en el departamento de sus padres, Edgard Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, oficiales de la Fuerza Aérea de Chile e integrantes de su Servicio de Inteligencia, quienes luego de vendarle los ojos procedieron a detenerla. Fue conducida hasta la Academia de Guerra Aérea, AGA, en donde la dejaron sentada en una silla toda la noche, sin dirigirle la palabra. Ella podía escuchar que una sala anexa se torturaba a otros detenidos, lo que le causaba un inmenso temor, pues suponía que sufriría la misma suerte. Estuvo sentada sin venda en los ojos, en una silla, primero en la oficina de Edgard Ceballos y luego en una sala de clases sentada en un pupitre con la vista hacia la pared. Solo lograba dormitar en la silla. No tuvo contactos de otros detenidos. Al día siguiente, en medio de golpes y amenazas, fue interrogada acerca de las actividades y contactos de su marido. Debía escribir todo lo que sabía de las reuniones y personas con las que se contactaba Arnoldo, Edgar Ceballos la interrogó sobre los mismos temas, nunca le mencionaron que su marido había sido asesinado. Era amenazada constantemente, le decían que tenían vigilada a su familia, especialmente a los niños. Al cabo de dos días fue devuelta al domicilio de sus padres.

Doña Celsa supo de la muerte de su esposo después de 15 días, tiempo en que el cuerpo de su esposo permaneció en el Instituto Médico Legal, a pesar de que ella concurrió en varias ocasiones a ver las listas y nunca apareció el nombre de su marido. Posteriormente supo que sí estaba registrado con su identidad al interior del Instituto Médico Legal y que había sido trasladado hasta el Patio 29. Su padre Oscar Parrau y su cuñado, David Camú Veloso, lograron encontrar el cuerpo y lo exhumaron de una fosa en la que había dos cuerpos más. No hubo funeral, se realizó una cremación como pidió Celsa.

Tercera detención

El padre de doña Celsa, don Oscar Parrau Escobar, fue militante fundador del Partido Socialista, de profesión contador auditor. A los 72 años de edad, en diciembre de 1976, fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones y llevado al Cuartel General de la institución, ubicado en General Mackenna. Celsa iba todos los días a las puertas del Cuartel de Investigaciones para saber de su padre y se quedaba largas horas esperando e intentando hacerle llegar los medicamentos que tomaba diariamente. Una tarde al regresar a su casa, su madre le informó que efectivos de Investigaciones habían concurrido a detenerla, que no habían dejado orden ni informado el motivo de la detención, pero habían



Foja: 1

señalado que, si no se entregaba, su padre no saldría en libertad. Doña Celsa concurrió a Investigaciones y, como era de esperar, fue detenida en el acto. Su padre continuó detenido en los que llamaban “la Patilla”, lugar donde tenían a muchos detenidos en completo hacinamiento, incluso debían sentarse por turnos, dándole preferencia a los mayores. Obviamente tenían serias dificultades para dormir.

Doña Celsa fue interrogada por unos agentes que decían ser “Alfa” y “Beta”, sobre los mismos temas que había sido interrogada en la Academia de Guerra Aérea. También le preguntaron si había viajado a Cuba. Permaneció en una celda con otras mujeres alrededor de 12 días, posteriormente fue trasladada al Centro de Reclusión Femenino, ubicado en Vicuña Mackenna, como “presa común”. Fue llevada a Tribunales y liberada sin cargos

Después de esta detención, doña Celsa Parrau, para evitar nuevas acciones represivas, debió abandonar el país y permaneció en el exilio hasta el año 1985.

I.2.2. Detención, torturas, prisión y exilio de Ernesto Gutiérrez:

Don Ernesto Gutiérrez fue detenido en la vía pública por agentes del Servicio de Inteligencia Naval y de Investigaciones el 24 de septiembre de 1973, en compañía de Arnaldo Camú Veloso, integrante del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Ambos fueron subidos en la parte de atrás de un automóvil y amarrados con una soga. Arnoldo Camú recibe una bala al interior del vehículo y es llevado agónico hasta la posta central. Sus familiares pudieron recuperar su cuerpo 15 días después. Actualmente su homicidio es investigado por el Ministro Mario Carroza en la causa 518-2010.

Al momento de su detención, don Ernesto tenía 27 años y trabajaba como egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Chile, en la Dirección de Planificación de la Línea Aérea Nacional, Departamento de Organización y Métodos. El 24 de setiembre de 1973, había acompañado a Arnaldo Camú a un encuentro, luego de haber coincidido en una reunión con algunos compañeros de partido, que habían tomado la decisión de asilarse. Cuando se retiraba del lugar, apareció Arnoldo, quien lo llama e invita a quedarse, pues tenía un encuentro con los mismos compañeros con los que Ernesto se había juntado, quienes trabajaban con Camú. Camú les señaló entender las razones por las que se asilaban, pero les comunicó su decisión de quedarse en Chile. Como Ernesto tampoco pensaba salir del país, lo invito a que lo acompañara esa mañana.

Después de encontrarse el día 24, se dirigieron hacia el sector de Avenida Matta y al llegar a calle Santiaguillo, una persona esperaba a Arnoldo Camú delante de una camioneta. Luego de conversar unos momentos se marchó, entonces, al cruzar la esquina, ambos se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados por dos personas y que un tercero permanecía en un automóvil Fiat. En esas circunstancias, corrieron y doblaron por calle Lord Cochrane hacia el sur, siendo alcanzados por los sujetos armados antes de llegar a la esquina siguiente. Don Ernesto y Arnoldo Camú fueron amarrados con una soga, con ambas manos unidas a la espalda, mientras eran los agentes os apuntaban con sus armas y los amenazaban. Fueron subidos en los asientos traseros del automóvil Fiat, Arnoldo



Foja: 1

quedó al lado de la puerta derecha, Ernesto en el centro y en el lado izquierdo uno de los agentes. El que fungía como jefe de la patrulla se ubicó en el asiento de copiloto.

Los agentes recibieron instrucciones por radio, en el sentido que debían entregar a Ernesto en el Cuartel Central de Investigaciones, lugar al que se dirigieron. Los agentes iban con las armas en las manos.

Mientras se desplazaban por calle Amunátegui, pasado Huérfanos, logran desatarse y Arnoldo Camú intenta abrir la puerta para escapar, recibiendo de inmediato dos disparos a quemarropa que lo dejaron agonizando. Al llegar al Cuartel de investigaciones, don Ernesto fue entregado en la guardia, y los agentes, identificándose como funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), dieron instrucciones expresas de que don Ernesto debía ser interrogado, por haber sido detenido en compañía de un miembro de la Dirección del Partido Socialista. Al bajar del auto, don Ernesto vio por última vez a Arnoldo Camú en estado agónico. Los agentes aprehensores fueron identificados en la causa Rol N° 518-2010, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por homicidio de Arnoldo Camú Veloso, sustanciada por el Ministro Mario Carroza.

En el Cuartel de Investigaciones, don Ernesto fue golpeado en reiteradas oportunidades y en distintas oficinas. Posteriormente su domicilio fue allanado y los funcionarios de Investigaciones encontraron literatura que consideraron “extremista”. Don Ernesto fue sometido a un interrogatorio vendado, en que sufrió aplicación de electricidad sobre una parrilla reiteradas veces. Para llegar al lugar donde fue torturado debieron realizar un desplazamiento complicado, según le pareció en las circunstancias en las que se encontraba, con los ojos vendados. Don Ernesto sentía que los funcionarios lo interrogaban tratando de obtener información que les resultará de interés, pero sin un sentido claro. Luego fue llevado a una celda en un subterráneo oscuro y fétido, donde lo dejaron con un detenido por delito común.

Luego de dos días sin comer, fue subido a un vehículo y conducido al Estadio Nacional, en muy malas condiciones físicas y emocionales producto de las torturas recibidas. Fue entregado a oficiales de Ejército encargados del Estadio, bajo el cargo de “terrorista peligroso”, con la indicación de que debía ser interrogado por un equipo especializado. Después de amenazas e intimidaciones, los militares ordenan mantenerlo incomunicado. Lo tomar y lo dejan tirado boca abajo, sobre un montículo de arena, situado frente a los camarines que servían de celdas para los prisioneros del Estadio Nacional, con vigilancia militar. Don Ernesto permaneció en esa condición hasta el día siguiente, cuando pudo moverse. Discretamente y sin que los guardias se dieran cuenta, ingresó a uno de los camarines y se mezcló con el resto de los prisioneros del lugar.

Recuerda entre los detenidos a Luis Corvalan hijo y al “ciego Fuentes”, un militante socialista que pertenecía al GAP (Grupo de Amigos Personales del presidente Salvador Allende), a quienes les contó las circunstancias de su detención y lo ocurrido con Arnoldo Camú. Don Ernesto permaneció por varios días en este lugar, se encontraba en pésimas condiciones, mal alimentado y sin abrigo, pero por intermedio del personal de Cruz Roja, logró avisar a su familia donde se encontraba.



Foja: 1

Don Ernesto estuvo detenido en el Estadio Nacional hasta los primeros días de octubre de 1973, soportando las tensiones y miedos originados por la situación de inseguridad permanente. En la fecha señalada, junto a un grupo de aproximadamente cien prisioneros, don Ernesto fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago, lugar donde fue asignado, junto con Julio González, Juan Soto y una persona de apellido Cornejo, a una celda de 2 por 3 metros aproximadamente, la que estaba absolutamente vacía, sucia y con mal olor. Los días siguientes limpiaron la celda y armaron literas. Esta celda, en algunas oportunidades, llegó a albergar hasta doce detenidos, por la sobrepoblación de presos políticos, los que eran sometidos a condiciones de inhumanidad extremas.

La galería donde se encontraba don Ernesto con otros presos políticos, también tenía presos "comunes". En el periodo que permaneció en la cárcel pública, don Ernesto compartió reclusión con personas que conocía anteriormente y otros que conoció en la cárcel. Recuerda a Jorge Coloma, Rubén Aranda Díaz, Carlos Lazo, José Gómez López, Erick Schnacke, Osiel Nuñez, Fernando Villagrán, Enérico García, Jorge Belmar, Hugo Medina, Marcelo Romo y otros tantos prisioneros políticos.

Estando en el recinto carcelario, se le instruyó un Consejo de Guerra, acusado de actividades armadas extremistas, siendo condenado, en la causa N° 388-73, a tres años efectivos de presidio menor en su grado mínimo. Su defensa pena en el proceso fue asumida por un estudio de abogados contratados por su familia y sus compañeros del Partido Socialista. Luego de 14 meses, la pena le fue conmutada por la de extrañamiento, lo que le significó un exilio de 10 años.

Durante la última semana del mes de noviembre de 1973, mientras permanecía en la Cárcel Pública, fue retirado del recinto por efectivos de la Fuerza Aérea, los que luego de encapucharlo y amarrarlo en la parte posterior de una camioneta, lo condujeron hasta la Academia de Guerra Aérea. En este recinto y estando encapuchado, fue interrogado por tres o cuatro sujetos, los que por su lenguaje supone eran oficiales. Bajo amenazas, le preguntaban por la estructura de la organización que lideraba Arnoldo Camu y quienes lo sucedían en la dirección. En esa oportunidad supo donde se encontraba por referencia de sus interrogadores. Posteriormente, siempre encapuchado, fue llevado a un lugar donde, estando de pie, escuchó los gritos de una mujer que estaba siendo torturada. No le dijeron nada, solo era para amedrentarlo con lo que escuchaba. Tras esta situación, lo llevaron a un lugar donde le entregaron papel y lápiz, con la instrucción que debía escribir lo que sabía, tras lo cual lo dejaron sentado en un pupitre contra la pared, en una sala en la que frente a él había un planisferio.

Cuando era llevado al baño, don Ernesto pudo observar a través de la capucha, dándose cuenta que estaba en una sala, que en las esquinas y en el centro de las paredes había pupitres con detenidos encapuchados como él. En la noche dormía en el suelo cubierto con una frazada que había llevado desde la cárcel.

Dos días después lo llevan a un lugar desconocido, en el camino tenía que contar los escalones para subir y bajar. En ese lugar fue interrogado bajo tortura, fue colgado, amarrado de las manos y de los pies y le dicen que se había burlado



Foja: 1

de ellos por lo que había escrito. Le aplicaron electricidad y propinaron golpes en el cuerpo de manera reiterada. En un momento en que se le corre la capucha, le pareció estar en un teatro y alcanzó a ver el magneto con el que generaban la electricidad que le aplicaban. La sesión de torturas fue larga, aunque no sabe cuánto tiempo duró. Uno de los agentes del SIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, se jactaba de dar trescientos golpes sin cansarse. Don Ernesto recuerda que llegó de regreso a la sala donde estaba su sitio en muy malas condiciones.

Tras aproximadamente veintitrés días de permanencia en el centro de detención y tortura de la Fuerza Aérea, días en que don Ernesto permaneció “desaparecido” para su familia y compañeros, fue regresado a la Cárcel Pública, donde tuvo que recuperar sus pocas pertenencias, pues sus compañeros detenidos pensaban que estaba muerto y las habían repartido.

En la Academia de Guerra Aérea, antes de ser devuelto a la Cárcel Pública, don Ernesto fue incorporado en el Consejo de Guerra Rol 1-73. Mucho después, cuando ya había sido trasladado a la Cárcel de Capuchinos, se le notificó personalmente su sobreseimiento en dicho proceso, para lo cual fue llevado nuevamente a la Academia de Guerra Aérea, donde se encontraba la Fiscalía Aérea en Tiempo de Guerra. En esta causa no tuvo defensa formal, sólo se realizaron gestiones de los abogados que participaron en su Consejo de Guerra, para localizar su paradero, ya que mientras estuvo detenido en la Academia de Guerra Aérea, las autoridades no informaban donde se encontraba y en que condición.

Durante su permanencia en la Academia de Guerra Aérea, AGA, don Ernesto sólo tuvo contacto visual con el suboficial González, el “chico González”, quien estaba en calidad de prisionero en la misma sala y a quien ubicaba en la cárcel, como parte del grupo que formaba parte del proceso contra personal de la Fuerza Aérea (Causa 1-73), con quienes coincidía en algunas actividades deportivas permitidas por Gendarmería, aun cuando estaban en distintas galerías.

En noviembre de 1974 se hizo efectiva la conmutación de pena y don Ernesto salió del país con pena de extrañamiento a Argentina, país en el que residió hasta el mes de abril de 1976. Tras el golpe de Estado, don Ernesto debió abandonar el país por la falta de seguridad para los exiliados chilenos, por lo que viaja a Venezuela, país en el que logró reunirse con su familia en diciembre de 1976. Regresó a Chile en noviembre de 1984, separado de su esposa.

El año 1973, don Ernesto estaba preparando su informe de práctica profesional para obtener el título de Administrador Público, lo que no puso concluir por su detención y larga reclusión en los recintos ya señalados. A su regreso a Chile, no pudo ejercer en la administración pública. En septiembre de 1973, su esposa estaba en Argentina, embarazada. Don Ernesto tenía pasajes para asistir al nacimiento de su hija en Buenos Aires. Nació el 17 de octubre de 1973, cuando don Ernesto ya se encontraba en prisión. Conoció a su hija a los nueve meses, al interior de la cárcel de Capuchinos (los presos políticos acogidos a la conmutación de penas, pasaban por Capuchinos antes de embarcarse con rumbo a los países de acogida).

I.2.3. Detención y torturas de Mario Alburquerque:



Foja: 1

En noviembre de 1973, Mario Alburquerque tenía 19 años, estudiaba sociología en la Universidad Católica de Chile y era integrante de la Dirección Local Cordillera del MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que abarcaba la zona oriente de Santiago. Personalmente estaba encargado de re-estructurar el MAPU en la comuna de Las Condes.

Su detención fue practicada en su domicilio el 5 de noviembre de 1973, por una patrulla de militares compuesta por un oficial y 3 soldados, sin orden judicial o administrativa alguna. Lo subieron y amarraron a un jeep, sin decirle nunca los motivos de la privación de libertad ni la institución a la que pertenecían, identificándose solamente como militares. De hecho, pudo saber que había sido trasladado a la Academia de Guerra Aérea, en donde estuvo cinco días, siempre con la capucha puesta, cuando por debajo de ella, pudo ver que los utensilios de la alimentación tenían el logo de la FACH.

Fue instalado en una oficina pequeña y vacía del subterráneo y los interrogatorios se realizaron en el salón de actos del edificio. Muchos años después, ya recuperada la democracia, pudo ir a la Academia de Guerra Aérea y reconocer los lugares donde permaneció recluido. Las torturas consistieron en amenazas de muerte, golpes de puño en todo su cuerpo, aplicación de electricidad en los genitales y tetillas, aislamiento, sin permitirle dormir ni acudir al baño para realizar sus funciones fisiológicas. Asimismo, debió estar presente durante la tortura a otro detenido al que no conocía, al que le aplicaban electricidad en los testículos, en medio de un interrogatorio. Los agentes amenazaban a Mario con el mismo método u otros peores. La amenaza sobre su vida era permanente, le hacían ver que nadie sabía dónde estaba y ni siquiera quién lo había detenido, Mario considera que era una forma de hacerle ver, que podían hacer con él lo que quisieran.

Por otra parte, en aquella época Mario era muy delgado, pesaba alrededor de 44 kg., con 1,63, metros de altura, por lo que los efectos de las golpizas eran significativos en su organismo.

La mayor parte del tiempo debió permanecer sentado frente a un escritorio, incluso debía dormir en esa postura. Excepcionalmente, le permitían descansar en un colchón, que era compartido con otros prisioneros. Había una radio encendida durante toda la noche.

Luego de cinco días fue sacado del lugar junto a otros dos detenidos. Durante el trayecto, Mario tenía mucho miedo de que podrían ser fusilados. Cree que tomaron Av. Kennedy y a la altura de Lo Saldes les sacaron la capucha. Los dos detenidos fueron dejados en la Cárcel Pública, a él, en cambio, lo condujeron hasta el Ministerio de Defensa, en donde un oficial de Ejército le indicó que sería dejado en libertad, advirtiéndole que ya lo conocían y que debía abandonar toda actividad política, ya que, si persistía en ella, sería nuevamente detenido y las consecuencias esa vez sí serían graves.

II.- DAÑO PRODUCIDO.

Como consecuencia directa de las torturas infligidas a nuestros representados se desprende, inequívocamente, un perjuicio psíquico, provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños



Foja: 1

psíquicos de los que aún padecen secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de ser obligados dos de ellos a abandonar el país sin poder retornar por muchos años, alejándolos de sus familias, compañeros y amigos, sin perjuicio de la pérdida de estudios y proyectos vitales.

Como expresó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura “Lo cierto es que la mayoría de las víctimas que prestaron testimonio ante esta Comisión fueron expuestas a situaciones límites que erosionaron soportes de sus vidas y dislocaron sus proyectos. Sus confesiones ilustran algunas de esas dimensiones: Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida [...] lo más importante es el efecto psicológico del maltrato personal y a otras víctimas, que deja una huella imborrable y difícil de describir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma. Hombre, detenido en 1974, a los 35 años, Región Metropolitana.

Me cambiaron... Nos cambiaron la vida junto a mi esposa, nos marcaron para toda la vida, nos metieron el miedo hasta los huesos... Me habían... detenido..., secuestrado..., torturado..., humillado..., pateado..., golpeado..., insultado..., relegado..., pasado de hambre..., flaco..., ojeroso..., herido en el alma... Hombre, detenido en 1973, a los 24 años, Región Metropolitana. La tortura ha sido conceptualizada como una experiencia traumática que ha provocado consecuencias sistémicas. No es solamente una modalidad compleja de agresión, crueldad y denigración. Sus efectos desquiciantes se agravan precisamente porque son agentes del Estado o personas a su servicio quienes dañan en nombre de la patria. Dadas estas características, se puede afirmar que las condiciones de prisión política y tortura descritas en este Informe violaron los derechos de las personas, causándoles daños emocionales, morales y materiales...”.

Estos daños emocionales, morales y materiales, que necesariamente se causaron a las víctimas de prisión política y torturas, son lo que estamos pidiendo en esta demanda sean indemnizados. Los daños tanto físicos como psíquicos son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quienes los padecen, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Ha dicho la jurisprudencia que “el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta la integridad física o moral de un individuo...” (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LVIII, Segunda Parte, sección cuarta, pág. 374).

La E. Corte Suprema ha expresado:

“Que, en cuanto que lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atinente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona



Foja: 1

e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva” (S.C.S. Rol N° 30.598-14, de 1 de diciembre de 2015, considerando 33°).

Y agrega en el mismo fallo: “...ha de considerarse que la reparación generada por el delito, además de aparecer formulada generalmente de modo expreso, está instituida implícitamente en la institución jurídica de la responsabilidad, de modo que es precisamente en los ilícitos que emanan -entre otros- de este tipo de escenarios, de extrema convulsión social, donde el Estado debe, con justa propiedad y energía, conformar la pertinente acción reparatoria, inherente a la paz social, cual es uno de sus fines primordiales, en tanto sustento democrático de unión en la diversidad (ídem, considerando 32°).

En sentencia del año 2008, por homicidio calificado de Fernando Gabriel Vergara Vargas, la Corte Suprema señaló: “cabe recordar que la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva” (SCS Rol 6.308-07, de 8 de septiembre de 2008, considerando 23°).

En otro fallo, la E. Corte señala:

“... atendida la naturaleza del daño moral, resulta evidente que no existe posibilidad de rendir pruebas, para apreciar su monto, ya que el dolor o sufrimiento que pueda producir determinada circunstancia, y que se radica en la intimidad de una persona, no tiene parámetros no hay forma de medirlo o cuantificarlo...” (S.C.S. Rol 2097-2004, de 22 de diciembre de 2004).

Coincidimos plenamente con la jurisprudencia citada. El daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es. Las angustias, padecimientos y dolores, sumados a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Por todo ello, es que en este acto, en la representación que investimos como apoderados de los demandantes ya individualizados, demandamos al Fisco de Chile por daño moral, como consecuencia directa del secuestro, detención y torturas de que fueron objeto, el pago de cien millones de pesos (\$100.000.000) a cada uno de ellos, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime Su Señoría, de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

III.- EL DERECHO



Foja: 1

Respecto de los hechos delictuosos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes causaron el daño eran agentes del Estado, miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de Carabineros y de Investigaciones, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

El Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos: el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado "Informe Valech" (2004) y el Informe de la Comisión Asesora presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura" (Informe Valech 2, 2011). En efecto, nuestros representados fueron reconocidos como víctimas de prisión política y tortura en el mencionado Informe Valech 1.

La responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a nuestros mandantes, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa.

Del mismo modo, la responsabilidad del Estado emana del derecho internacional de los derechos humanos, vigente tanto en la época de comisión de los hechos denunciados como en la actualidad.

III.1 La responsabilidad del Estado en la Constitución Política de 1925.

La responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos.

La doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. En este sentido el profesor Eduardo Soto Kloss enseña que dicho principio general de responsabilidad del Estado emana de que el Estado chileno es una República, lo que implica que todos los sujetos tanto públicos como privados deben responder de sus actos y omisiones por encontrarse insertos en un Estado de Derecho. Esto tiene como consecuencia directa que cualquier sujeto que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar a los tribunales de justicia el resarcimiento de los perjuicios conforme al estado de derecho democrático. Lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que plasmaba ya el artículo 10 N° 1 de la Constitución de 1925, pues es inconstitucional que un sujeto de derecho sea lesionado y perjudicado sin ser indemnizado en relación a otros sujetos a los cuales no les afectan los actos u omisiones ilícitos del órgano estatal. La consagración del gobierno republicano y democrático se plasma de manera



Foja: 1

explícita en el artículo 1° de la Constitución de 1925 que señala: "El Estado de Chile es unitario. Su gobierno es republicano y democrático representativo".

Los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9.

El artículo 4 de la Constitución de 1925, fuente directa de los actuales artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones adolecían de nulidad. Si bien no se agregaba que dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señala, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. En cuanto a lo preceptuado por el actual artículo 6 de la Constitución de 1980 que, como dije, posee su fuente en el artículo 4 citado, existe meridiana claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a las leyes, pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional. Por lo demás el principio de sujeción a la Constitución se plasma en el artículo 2 de la Constitución de 1925 que dispone: "La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece".

El principio general de responsabilidad del Estado por sus actos y omisiones, entonces, se basa en los artículos 1, 2, 4 de la Constitución política de 1925 y se concreta en el artículo 10 N° 10 y N° 9 de la misma Constitución, que consagran, respectivamente, el derecho de propiedad, sin distinción alguna y la igual repartición de las cargas públicas.

En cuanto al primer precepto, esto es, el artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925, cabría decir que todo daño fruto del actuar de algún órgano del Estado, como lo son las Fuerzas Armadas y de Orden, en los presentes casos, constituye un desmejoramiento de la esfera patrimonial de los sujetos afectados y genera, como es obvio, el derecho a exigir la responsabilidad del Estado, pues nos encontramos ante una lesión del derecho de propiedad, ya que nuestros mandantes fueron privados de bienes que forman parte de su esfera de la personalidad y, según prescribe la citada norma constitucional, "nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley". Pues bien, ninguna de las hipótesis descritas se verificó y, sin embargo, de igual manera se les privó de bienes personalísimos al atentar contra la esfera subjetiva e infligirles el daño moral indicado.

Por su parte, el artículo 10 N° 9 de la Constitución de 1925, fuente directa del artículo 19 N° 20 de la Constitución de 1980, aseguraba el principio de la igual repartición de las cargas públicas, el que obliga a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, ya que dicho daño producido antijurídicamente, implica una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas, derecho que la Constitución aseguraba y amparaba frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos. Este detrimento en la esfera de los afectos que han sufrido nuestros mandantes infringió la igual repartición de las cargas



Foja: 1

públicas al exponer a las personas de nuestros representados, a diferencia de otras muchas, a sufrimientos inhumanos. La actuación de la Fuerza Aérea, Armada de Chile, Ejército, Carabineros e Investigaciones, órganos del Estado, constituye un desigual tratamiento que infringe el artículo 10 N° 1 y 10 de la Constitución de 1925

III.2.1 Responsabilidad en el Derecho Administrativo actual

Desde otra perspectiva es necesario revisar la responsabilidad del Estado en el marco de la legislación actualmente vigente, atendido el principio de vigencia in actum de normas ius publicistas del Derecho Administrativo. El art. 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República dispone que "Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño."

En esta disposición constitucional se establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmente por ser de carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los organismos, como en los casos de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado.

Por su parte, el art. 4 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, prescribe que "El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiera ocasionado". El art. 44 de esta Ley agrega: "Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio".

La sentencia del caso del homicidio de los profesionales Guerrero, Nattino y Parada, el que se encuentra ejecutoriado, textualmente señaló:

"Que el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, establece la posibilidad para que cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, reclame de ello ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Esta última norma, establece una acción de carácter constitucional, para reclamar ante los tribunales de justicia, cualquier lesión que sufra una persona en sus derechos por la Administración del Estado, acción establecida en términos amplios, porque basta un perjuicio en los derechos, causadas por el Estado o sus organismos, para que se pueda activar la actividad jurisdiccional y obtener la reparación de los daños causados. De tal manera, que no es necesario acudir para impetrar el reconocimiento de un derecho, menoscabado por la actividad del Estado, necesariamente a la Ley sobre Bases de la Administración".

La jurisprudencia expuesta tiene su antecedente en la sentencia del caso '1Hexagón Limitada con Fisco', que señala:



Foja: 1

"... En consecuencia, un daño que se produzca por los órganos del Estado y que no esté amparado por las normas constitucionales genera responsabilidad conforme lo señalado en los artículos 3 y 7 del Acta Constitucional N° 2 anteriormente transcritos. Una situación similar se concluye analizando el daño que sufre el sujeto de derecho por parte de un órgano del Estado, a través de lo dispuesto en el N° 5 del artículo primero del Acta Constitucional N° 3 cuando prescribe "Artículo 1°...Esta Acta Constitucional asegura a todas las personas, N° 5 la igual repartición de los impuestos y contribuciones en proporción de los haberes o en la progresión o la forma que fije la ley la igual repartición de las demás cargas públicas". Así es como todo daño que produzca un órgano del Estado, implica según se ha dicho un menoscabo o lesión en lo suyo para la persona que lo sufre, se ve afectada por una carga que sólo ella soporta, generando una desigualdad en la repartición que vulnera la norma constitucional debiendo ser resarcida por el Estado. Todas las normas referidas anteriormente de las Actas Constitucionales número 2 y 3 se encuentran expresamente contempladas en la Constitución Política de 1980 en sus artículos 6°, 7° y 19 N° 20 y 24 y en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, publicada en el Diario Oficial con fecha 5 de diciembre de 1986 que en su artículo 4 establece la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones y en el artículo 44 que prescribe la responsabilidad de los órganos de la Administración por los daños que causen por falta de servicio, reconociendo el derecho del Estado de repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta que causó el daño."

La doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la responsabilidad en principios de derecho público "Sociedad Fuschs y Plath con Fisco", sentencia de 11 de enero de 1908 y "Lapostol con Fisco", sentencia de 8 de enero de 1930. Sin embargo, será en la sentencia dictada en "Hexagon con Fisco", de 28 de julio de 1987, en que expresamente se declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las normas constitucionales y legales diversas al Código Civil. Desestima la infracción del artículo 2332 del citado Código al no darle aplicación e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la Constitución y Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, en que radica el origen de la responsabilidad del Fisco.

La circunstancia que se desea destacar es que la jurisprudencia, sobre la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la Administración. Esta normativa especial arranca de los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 44 de la Ley N° 18.575.

En lo sustancial la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación. En el caso el factor de imputación es la responsabilidad del órgano por la falta personal del agente.

III. 2. 2 Concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos.



Foja: 1

En el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados:

1.- En cuanto al daño moral. Como se verá con mayor profundidad al analizar el daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume.

2.- La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, agentes del Estado torturaron a nuestros mandantes sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno.

El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron órganos de su administración, funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Ejército y Armada de Chile, los que actuaron en contra de nuestros representados y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

3.- Nexo causal. El daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito civil.

4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

III.2.3. Procedencia de la Indemnización del Daño Moral.

La responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común.

La indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral.

La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible.

En efecto, toda persona que alega que el perjuicio causado a un tercero le lesiona directamente a ella, puede iniciar una acción de reparación por el daño que le provocó esta situación. Es más, se ha dicho con insistencia por nuestros tribunales, que los daños morales provocados a los parientes más próximos no necesitan de prueba, presumiéndose el perjuicio por la muerte de su pariente. Así, se ha fallado que "el daño moral es una materia discrecional y de apreciación privativa de los jueces de instancia; para dar por establecida su existencia basta con que el juez estime acreditada la causa que lo genera y el nexo de parentesco o relación de quien lo impetra. En consecuencia, en el cuasidelito de homicidio sólo es necesario tener por probada la muerte de la víctima por la acción de quien la produce y el parentesco de la víctima con los que reclaman" (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXVII. Segunda Parte, Sección Cuarta, pág. 6).

Por lo demás, la Corte Interamericana en el caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C N° 15, párr. 76) estableció: "Que los padres sufren moralmente por la muerte cruel de sus hijos, pues es de la propia naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante



Foja: 1

el suplicio de un hijo", con lo que reconoció que el daño sufrido debe ser indemnizado.

Fluye de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por mis mandantes.

III. 4. Imprescriptibilidad de la acción.

Las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en nuestro caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980.

La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. En este sentido el profesor Eduardo Soto Kloss ha expresado en el volumen II de su obra "Derecho Administrativo, Bases Fundamentales. El principio de Juridicidad", p. 284, que "...la aplicación de fórmulas privatistas a la relación entre Estado (Administración) y agraviado particular (natural o jurídico), que nace del daño cometido por aquél, no es una relación de derecho privado -que son reguladas por el Código Civil- sino una relación jurídica pública, que obedece a otros principios (que son de derecho público) y, en consecuencia, necesita de otras soluciones para encontrar lo justo concreto que resuelva el conflicto originado por dicho daño". En el mismo sentido en nota (22) al artículo del mismo profesor, intitulado Bases para una teoría general de la responsabilidad extracontractual del Estado en el derecho chileno, en Gaceta Jurídica N° 56/1985 señala "que hacer aplicable esas disposiciones -título XXXV del libro IV del Código Civil- implica un error técnico evidente y lo que es peor aún, un falseamiento del problema mismo de la responsabilidad del Estado, que no gira sobre la idea de un sancionar a un culpable (como ocurre en la legislación civil), sino sobre la idea de restituir a una víctima en la situación anterior en que se encontraba antes de sufrir el daño antijurídico, y que no estaba jurídicamente obligada a soportar".

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción.

III. 5. Fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar.

La obligación de indemnizar debe considerarse a la luz del derecho constitucional y también desde las normas del derecho internacional de los derechos humanos, con especial consideración del Bloque de Constitucionalidad, que integra el art. 5° CPE y las normas de derecho internacional de origen consuetudinario o contractual, vigentes en Chile, como pasaremos a detallar más adelante en este escrito.



Foja: 1

El profesor Humberto Noguera explica que “por bloque constitucional de derechos fundamentales entendemos el conjunto de derechos de la persona (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal c) de la CADH, todos los cuales, en el ordenamiento constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Chilena vigente.” (Humberto Noguera Alcalá, Informe en derecho sobre precedentes jurisdiccionales en materia de media prescripción, REVISTA IUS ET PRAXIS - AÑO 14 - N° 2 589. P. 568).

Los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen el carácter de violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, concurrente con la de secuestro agravado o torturas en el derecho interno. Por esta razón, la responsabilidad del Estado debe determinarse de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran normas de ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de la norma estipulada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 que dispone: “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231.

En efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno. A este respecto debe tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

El artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, que previene -según ya se afirmó- que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

El Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la



Foja: 1

responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra de los demandantes, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional. Y en este caso específico, como delitos de Lesa Humanidad. En efecto, en la medida que el ilícito cometido se da en un contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito de Lesa Humanidad, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

III.5.1. Obligación de reparar en la Convención Americana de Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1º la obligación de los Estados Partes, de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

La primera obligación de los Estados es respetar los derechos. La segunda obligación es la de garantizar. Esta obligación implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental de manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La Corte IDH ha establecido que “como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 28 de julio de 1988, considerando 166).

Por lo tanto, la obligación de garantizar incluye también el deber de reparar. La misma Corte ha señalado específicamente que “para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convención, no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada” (Corte IDH, Caso Caballero Delgado, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, considerando 58)

La Corte IDH ha señalado que la indemnización por violaciones a los derechos humanos, encuentra fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional. Así lo ha entendido el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos con base en el artículo 50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En el ámbito regional, la propia Convención Interamericana establece en el artículo 63.1:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente,



Foja: 1

que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

A juicio de la Corte IDH, es un principio de Derecho internacional, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la indemnización constituye la forma más usual de hacerlo. (Corte IDH, Caso Godínez Cruz, sentencia de 21 de julio de 1989, “Reparaciones y Costas”, considerando 23).

También en el Caso Godínez Cruz, Corte señaló que “la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” (Ídem, considerado 24).

La Corte aclara que el 63.1 no remite al derecho interno, sino que la obligación se establece con independencia del derecho nacional. También se señala que la responsabilidad estatal surge sin necesidad de falta o culpa del agente, ya que una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal (ídem, considerandos 27 y 28).

III.5.2. Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

Nuestros representados fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, en algunos casos sometidos a Consejos de Guerra... Pero además fueron víctimas de torturas, que constituye una de las prácticas más crueles e inhumanas que la comunidad internacional rechaza y ha intentado erradicar.

El Estado de Chile suscribió la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 23 de septiembre de 1987 y la ratificó el 30 de septiembre de 1988. El art. 1° de la Convención dispone:

“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

El artículo 12 de la Convención señala que cada Estado parte “velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial” y el art. 14 señala que el Estado velará porque su legislación “garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho



Foja: 1

a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”.

Y el art. 14 N° 2 agrega: “Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales”.

El artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, previene que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática.

III. 5. 3. Crímenes de guerra y de lesa humanidad

Es importante destacar, además, que las torturas infligidas a los demandantes, se realizaron como parte de un plan masivo y sistemático en contra de la población civil, la que había apoyado al gobierno depuesto, había formado parte de la izquierda política o se oponía activamente a la dictadura militar. Este actuar masivo y sistemático se acredita con los informes de verdad mencionados, los que son de público conocimiento.

Por lo tanto, las torturas sufridas por nuestros mandantes constituyen crímenes de lesa humanidad, así como crímenes de guerra, por cuanto a partir del 11 de septiembre de 1973, todo el país se hallaba jurídicamente en estado de Guerra.

Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, por medio del Decreto Ley N° 3, se declaró el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, agregando que la Junta asumía “la calidad de General en Jefe de las Fuerzas que operará en la emergencia”. Luego el Decreto Ley N° 5, de 12 de septiembre de 1973, señaló que el Estado de Sitio debía entenderse como “Estado o tiempo de guerra”, para los efectos de la aplicación de la penalidad que establece el Código de Justicia Militar en tiempos de guerra, demás leyes penales “y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación”.

Con anterioridad a golpe de Estado en Chile, ya en el año 1968, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968), que en su preámbulo señala que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, y que su represión efectiva “es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacional”.

El artículo 1º de la Convención declaró imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra. Según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por



Foja: 1

la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.

En el ámbito el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra de 1949, consagran desde entonces el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra y la prohibición de auto exonerarse que tienen los Estados, por las infracciones graves que hubieran cometido. Los Convenio de Ginebra de 1949 son:

i. Convenio de Ginebra I, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña.

ii. Convenio de Ginebra II, de los heridos y de los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar.

iii. Convenio de Ginebra III, sobre Prisioneros de Guerra.

iv. Convenio de Ginebra IV, sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra.

Estos Convenios fueron suscritos por Chile el 12 de agosto de 1949 y sus ratificaciones depositadas en Berna el 12 de octubre de 1950, entrando en vigor para Chile 6 meses después. Fueron publicados por Decreto N° 752 de Relaciones Exteriores, el 5 de diciembre de 1950 y publicados en el Diario Oficial los días 17, 18,19 y 20 de abril de 1950.

El artículo 3 común de los IV Convenios, establece disposiciones para conflictos armados sin carácter internacional que ocurran en el territorio de alguna de las Partes y ordena se trate con humanidad a las personas que no participan de las hostilidades y a los miembros de las FFAA que estén fuera de combate, por cualquier causa (herida, detención, etc.). Dice además están prohibidos en cualquier tiempo y lugar atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio, las mutilaciones, las torturas, etc.

El art. 147 del IV Convenio establece que se considerarán infracciones graves al Convenio los siguientes actos contra las personas: homicidio intencional, torturas o tratos inhumanos, atentar gravemente contra la salud o la integridad física, etc. Una disposición similar aparece en el art, 130 del Convenio sobre Prisioneros de Guerra (Convenio III).

El Convenio IV dispone en su artículo 148 (art 131 del Convenio III) que ninguna parte podrá exonerarse a sí misma de las responsabilidades en que haya incurrido ella u otra parte, respecto de las infracciones del art. anterior.

El art. 3 común, más los art. 147 del Convenio IV y el art. 13 del Convenio III, establecen obligaciones expresas a los Estados, prohíben el homicidio intencional, las torturas, los tratos crueles, etc. La infracción de estos artículos,



Foja: 1

significa una infracción grave de los convenios de lo cual surgen diversas consecuencias. Por una parte, se aplica el art. 148 del Convenio IV y el 131 del Convenio III, se prohíbe que el Estado se exonere asimismo de sus responsabilidades y por otra el Estado adquiere, de igual manera, responsabilidad internacional por las infracciones cometidas.

III.5.4. El derecho a la reparación plena y efectiva

El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 60/147, con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

Los Principios dividen los derechos de la víctima en tres categorías: el derecho a saber, el derecho a la justicia, y el derecho a obtener reparación. El Principio N° 11 señala: “Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”.

Respecto de la reparación de los daños sufridos, el Principio N° 15 expresa que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por fin promover la justicia y que la reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. El Principio N° 16 establece que se debe dar a las víctimas de manera apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La restitución, cuando ello sea posible, reclama la vuelta a la situación anterior a la violación perpetrada y supone entre otras acciones “el restablecimiento de la libertad, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”¹; la rehabilitación incluye asistencia médica y

1 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional psicológica y atención de los servicios jurídicos y sociales²; la indemnización debe cubrir cualquier daño valorable económicamente resultante de la violación, incluidos los daños físicos y mentales, las oportunidades perdidas, los daños materiales y la pérdida de ingresos³, los daños a la reputación o a la dignidad y los gastos necesarios para cubrir la asistencia jurídica o pericial, la asistencia médica y los medicamentos y los servicios psicológicos y sociales⁴.

Los principios y Directrices Básicos fueron posteriormente complementados por los «Principios Van Boven-Bassiouni» (2000), presentados a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el relator especial sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, M. Cherif Bassiouni.⁵



Foja: 1

En su Informe al 56 periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos el Relator Especial incorporó un anexo con los Principios complementados de acuerdo a la misión que le fue encomendada. Se incorpora un acápite décimo sobre formas de reparación y se establece en el Principio 23 que debería indemnizarse todo perjuicio evaluable económicamente que fuera consecuencia de una violación de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, incluyendo:

- a) El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia;
- b) La pérdida de oportunidades, incluidas las de educación;
- c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
- d) El daño a la reputación o a la dignidad; y
- e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y sociales.”⁶

En síntesis, las medias de reparación en su dimensión individual y pecuniaria deben ser aptas a efectos de cubrir todas las consecuencias del hecho lesivo y de esta manera resarcir todo daño ocasionado, incluido el daño emergente, esto es lo que la víctima o su familiar ha debido erogar o invertir con motivo de mitigar el daño directamente ocasionado. Igualmente comprende el deber de compensar lo que se ha dejado de percibir como consecuencia de los daños provocados -lucro cesante-. A ello se debe agregar la obligación de cubrir el daño moral consistente en la aflicción psíquica y física que se ha debido soportar. En este sentido, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷ como la Convención contra la Tortura de la ONU⁸, establecen los términos de una indemnización “justa” y/o “adecuada”, conceptos que a la luz de la jurisprudencia internacional deben apreciarse según cada caso concreto.

III.5.6. Jurisprudencia Corte Suprema

En el conocimiento de causas por graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante dictadura militar, la E. Corte Suprema, ha establecido la obligación de reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional. Así, la Corte Suprema en sentencia de 5 de septiembre de 2016 dictada en causa Rol N°24.288-2016, declaró que: “pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como los de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de una finalidad



Foja: 1

centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado.

La ausencia de una regulación jurídica interna para determinadas situaciones vulneratorias de derechos humanos impone al juez integrar la normativa existente con los principios generales del derecho internacional en la materia, que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos. La reparación integral del daño no se discute en el ámbito internacional y no sólo se limita a los autores de los crímenes, sino también al mismo Estado. La normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido y reafirmado, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.

A mayor abundamiento, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Undécimo: Que, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo impugnado, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad.”

En otro fallo, la E. Corte, en la causa rol 3058-2014, referido específicamente respecto al ilícito de torturas y la responsabilidad civil del estado falla lo siguiente:

“Cuarto: Que tratándose de delitos como los investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la



Foja: 1

reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Quinto: Que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. En el caso en análisis, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. En efecto, tratándose de delitos de lesa humanidad, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

Sexto: Que, en suma, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”. Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los apremios ilegítimos de que trata la presente investigación, debe ser indemnizado por el Estado”.

En su petitorio solicita: tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del FISCO DE CHILE, representado, -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizados, acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fueron sometidos, la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos) a cada uno de los demandantes CELSA PARRAU TEJOS, ERNESTO GUTIÉRREZ ZEGARRA Y MARIO ALBURQUEQUE FUSCHINI, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.



Foja: 1

SEGUNDO: Que la demandada contestó los autos, en dicha sostiene:

I.- SÍNTESIS DE LA DEMANDA.

Comparecen CELSA PARRAU TEJOS, ERNESTO ANTONIO GUTIÉRREZ ZEGARRA y de don MARIO LEONARDO ALBURQUERQUE FUSCHINI, representados por los abogados CRISTIAN CRUZ RIVERA, MAGDALENA GARCÉS FUENTES, HUGO MONTERO TORO, BORIS PAREDES BUSTOS y SEBASTIÁN VELÁSQUEZ DÍAZ, e interponen demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile para que sea condenado a pagar la suma de \$ 100.000.000.- (Cien millones de pesos) para cada uno de los demandantes, más reajustes de acuerdo a la variación del IPC, e intereses, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, intereses legales y las costas de la causa, por el daño moral sufrido como consecuencia de los delitos de la detención y torturas o aplicación de tormentos, cometido por Agentes del Estado.

Sucintamente, las circunstancias de hecho, constitutivos de sus acciones, son las siguientes:

1. Las detenciones y torturas de Celsa Parrau:

Primera detención:

En septiembre de 1973, doña Celsa Parrau Tejos tenía 34 años, era enfermera. Fue detenida el 11 de septiembre de 1973 en INDUMET, fábrica que se encontraba intervenida y en proceso de estatización. Alrededor de las 18 horas, efectivos de Carabineros rompieron el portón de entrada de la fábrica con tanquetas, lanzaron bombas lacrimógenas y detuvieron a todos los presentes, entre los que se encontraba doña Celsa. Posteriormente fue trasladada al Regimiento Tacna. En los sitios de detención fue sometida a golpes y malos tratos constitutivos de tortura.

Segunda detención:

El 24 de septiembre de 1973, cerca de las 21:00 horas se apersonaron en el departamento de sus padres, Edgard Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, oficiales de la Fuerza Aérea de Chile e integrantes de su Servicio de Inteligencia, quienes luego de vendarle los ojos procedieron a detenerla. Fue conducida hasta la Academia de Guerra Aérea, AGA, lugar en que fue sometida nuevamente a torturas, a fin de averiguar las actividades de su marido Arnoldo Camú Veloso, quien fue asesinado en esos días por agentes del Estado.

Tercera detención

Doña Celsa concurrió a Investigaciones y con el fin de prestar auxilio a su padre, don Celso Parrau Escobar, militante del Partido Socialista, de 72 años a esa fecha. En esas circunstancias fue detenida en el acto. Doña Celsa fue interrogada y, posteriormente fue trasladada al Centro de Reclusión Femenino, ubicado en Vicuña Mackenna, como "presa común". Fue llevada a Tribunales y liberada sin cargos. Después de esta detención, doña Celsa Parrau, para evitar nuevas acciones represivas, debió abandonar el país y permaneció en el exilio hasta el año 1985.



Foja: 1

2. Detención, torturas, prisión y exilio de Ernesto Gutiérrez:

Don Ernesto Gutiérrez fue detenido en la vía pública por agentes del Servicio de Inteligencia Naval y de Investigaciones el 24 de septiembre de 1973, en compañía de Arnaldo Camú Veloso, al momento de su detención, don Ernesto tenía 27 años, en el trayecto fue asesinado Arnaldo Camú. Don Ernesto, fue conducido al Cuartel de investigaciones, lugar en el cual don Ernesto fue golpeado en reiteradas oportunidades y sometido a interrogatorios y torturas. Luego de dos días sin comer, fue subido a un vehículo y conducido al Estadio Nacional. Estando en el recinto carcelario, se le instruyó un Consejo de Guerra, acusado de actividades armadas extremistas, siendo condenado, en la causa N° 388-73, a tres años efectivos de presidio menor en su grado mínimo. Su defensa pena en el proceso fue asumida por un estudio de abogados contratados por su familia y sus compañeros del Partido Socialista. Luego de 14 meses, la pena le fue conmutada por la de extrañamiento, lo que le significó un exilio de 10 años. Durante la última semana del mes de noviembre de 1973, mientras permanecía en la Cárcel Pública, fue retirado del recinto por efectivos de la Fuerza Aérea, los que luego de encapucharlo y amarrarlo en la parte posterior de una camioneta, lo condujeron hasta la Academia de Guerra Aérea. Lugar en que fue sometido reiteradamente a interrogatorios y torturas. Tras aproximadamente veintitrés días de permanencia en el centro de detención y tortura de la Fuerza Aérea, fue regresado a la Cárcel Pública.

En noviembre de 1974 se hizo efectiva la conmutación de pena y don Ernesto salió del país con pena de extrañamiento a Argentina, país en el que residió hasta el mes de abril de 1976.

3. Detención y torturas de Mario Alburquerque:

En noviembre de 1973, Mario Alburquerque tenía 19 años. Su detención fue practicada en su domicilio el 5 de noviembre de 1973, por una patrulla de militares compuesta por un oficial y 3 soldados, sin orden judicial o administrativa alguna. Fue trasladado a la Academia de Guerra Aérea. En el lugar fue torturado mediante amenazas de muerte, golpes de puño en todo su cuerpo, aplicación de electricidad en los genitales, aislamiento etc. Luego de cinco días fue sacado del lugar y lo condujeron hasta el Ministerio de Defensa, en donde un oficial de Ejército le indicó que sería dejado en libertad, advirtiéndole que ya lo conocían y que debía abandonar toda actividad política, ya que, si persistía en ella, sería nuevamente detenido y las consecuencias esa vez sí serían graves.

Invocan como fundamento jurídico de sus acciones dirigida en contra del Fisco de Chile, todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los arts. 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de



Foja: 1

la Corte Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

Contesto la demanda oponiendo las siguientes excepciones, alegaciones y defensas.

II.- EXCEPCIONES, DEFENSAS Y ALEGACIONES QUE SE OPONEN A LA DEMANDA.

II.1.- EXCEPCIÓN DE REPARACION SATISFACTIVA. IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACION ALEGADA POR HABER SIDO YA INDEMNIZADOS LOS DEMANDANTES.

a) Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

No resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”.

Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional¹. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a si misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas².

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero³. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas



Foja: 1

negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño⁴.

b) La complejidad reparatoria.

Como bien lo expresa Lira, los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto⁶. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones⁷. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación⁸. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado⁹.



Foja: 1

Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a V.S. a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

- c) Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Es necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia.

Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios¹⁰.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2015, en concepto de:

A) Pensiones: la suma de \$199.772.927.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig)

B) Pensiones: \$419.831.652.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

C) Bonos: la suma de \$ 41.856.379.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$22.205.934.047.- por la ya referida Ley 19.992; y



Foja: 1

D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

E) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 21.256.000.000.-

En consecuencia, a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

d) Reparaciones específicas.

Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso que nos ocupa, cabe señalar que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones.

En efecto, la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

De esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

e) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto,



Foja: 1

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.¹¹

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS¹² en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2014, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.- ¹³Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.



Foja: 1

f) Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional¹⁴, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”¹⁵.

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el “Memorial de los prisioneros de Pisagua” en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo “Para que nunca más” en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial “Si estoy en tu



Foja: 1

memoria, soy parte de la historia” en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial “Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama” en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el “Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama” en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el “Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos” en la Plaza de Armas de Curacaví; el “Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el “Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca” en esa ciudad; y el “Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas” en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

g) La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco¹⁶ ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”.

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013¹⁷, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas



Foja: 1

de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos¹⁸”.

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”¹⁹, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que “la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial (...)”²⁰.



Foja: 1

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados²¹.

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación²².

En conclusión, estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opongo la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados los demandantes de autos.

II.2.- EN SUBSIDIO, EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.

En subsidio de la excepción de reparación alegada, opongo a la demanda la excepción de prescripción extintiva de las acciones deducidas conforme a los siguientes argumentos.

a) Normas de prescripción aplicables.

Opongo la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en



Foja: 1

relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechacen las demandas en todas sus partes.

Según el relato de los demandantes, las detenciones, privaciones de libertad y torturas, que dan lugar a esta demanda se produjeron entre el mes de septiembre de 1973 y septiembre de 1974.

Es del caso S.S. que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 4 de junio de 2019, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente las acciones indemnizatorias deducidas como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que S.S. estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opongo la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

b) Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. “Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”²³.

Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad.”²⁴.

Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las



Foja: 1

normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente:

“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

c) Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aún cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.



Foja: 1

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

d) Jurisprudencia sobre la prescripción.

La sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 201325.

Como es de público conocimiento, nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

Señala al respecto el fallo:

“Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia”.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

Al efecto, el citado fallo dispone:

“Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos



Foja: 1

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991.”

“Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1° sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido.”

“Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio.”

“Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados.”²⁶.

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

Así, junto al considerando octavo antes citado, dispone el fallo en su considerando décimo que:



Foja: 1

“Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto”.27.

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

Las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo²⁸ no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por esta defensa, lo que solicitamos se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.²⁹

e) Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia³⁰, que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f) Normas contenidas en el Derecho Internacional.

Finalmente, aun cuando el demandante formule alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, mi parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.



Foja: 1

La “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar –tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema³¹- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal³².

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

El planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país.

En efecto, la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, que en sus considerandos



Foja: 1

vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar:

“VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991.”

“VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5º inciso 2º de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables.

Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada – basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso”.

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema³³.

No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, S.S.I. no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto precedentemente S.S. deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

II.3.- EN CUANTO AL DAÑO MORAL E INDEMNIZACIONES RECLAMADAS.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procedo a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al excesivo monto pretendido de \$ 300.000.000.- en total.



Foja: 1

a) Fijación de la indemnización por daño moral.

Con relación al daño moral hacemos presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Ha dicho la Excma. Corte Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía imaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.

Es en la perspectiva antes indicada, que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, es dable advertir que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago³⁵. En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Es más, la I. Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudir al Principio de



Foja: 1

Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891 – 201336, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: “Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio -lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto b) En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En efecto, en subsidio de las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción de las acciones deducidas, esta parte alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, S.S. debe considerar todos los pagos recibidos por los actores a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También es pertinente hacer presente a S.S. que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente el monto pecuniario demandado.

II.4.- PAGO DE REAJUSTES E INTERESES.-

Además de lo alegado, hago presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja las demandas y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Cabe mencionar lo anterior, pues los actores solicitan el pago de reajustes e intereses desde la presentación de la demanda y hasta la fecha de su pago efectivo.

Pues, bien a la fecha de interposición de las demandas de autos a tramitación y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene mi representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.



Foja: 1

Lo anterior implica que, en casos como los de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

La jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1°, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, "En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio."

Por consiguiente, el hipotético caso de que S.S. decida acoger las acciones de autos y condene a mi representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y mi representado incurra en mora.

TERCERO: Que evacuando la réplica, la demandante expone:

1. Respecto de los hechos

Debido a que el Consejo de Defensa del Estado, en un acto de buena fe que no podemos dejar de resaltar, no discute los hechos que han sido invocados en la demanda, de modo que no insistiremos en el planteamiento de éstos, ya que han sido debidamente expuestos en la demanda.

2. Respecto de la excepción de reparación integral

El Consejo de Defensa del Estado esgrime como argumento el hecho de que nuestros representados han obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.992 que estableció medidas de reparación para las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura o la existencia de la Ley 19.123 y 19.980 que establecieron medidas de reparación para los familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, sin embargo, debemos dejar en claro que esto no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República.

La pretensión de oponer excepción de pago, resulta irreconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es



Foja: 1

aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

La preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no es de ninguna manera incompatible con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, no se ha establecido en las respectivas leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes. Con estas leyes, el Estado asume voluntariamente formas distintas de reparación y reiteramos que no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia por los medios que autoriza la ley. Así lo ha establecido en numerosas ocasiones la jurisprudencia de la E. Corte Suprema, en sentencias dictadas en causas por graves violaciones a los derechos humanos (Rol N° 30.598-14; N° 40.168-2017; N° 5436-10, sentencia reemplazo; Rol N° 62.211-16; Rol N° 82.246-16).

3. Respecto a la excepción de prescripción

La jurisprudencia de la E. Corte Suprema, ha sido enfática en señalar en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario (en este sentido, Sentencias Corte Suprema Roles N° 20.288-14, de 1e de abril de 2015; N° 1-424-2013 de 1 de abril de 2014; N° 22.652-2014 de 31 de marzo de 2015; entre otras).

Esta misma idea se ha repetido en demandas interpuestas por ex prisioneros políticos víctimas de torturas y/o sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura como los demandantes de autos, a partir de la sentencia por torturas de Daniel

García Soto en Talca (Sentencia C.S. Rol N° 4024-13). Ver también Sentencias Rol N° 3058-14 (torturas Guacolda Rojas); Rol N° 1092-15 (torturas Isla Dawson); Rol N° 82.246-16 (torturas Villa Grimaldi); N° 40.168-2017 (torturas Eva Palominos y Patricia Zúñiga).

Por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que reclama.



Foja: 1

En síntesis, pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente.

En la situación de hecho demandada, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.

Todo lo señalado, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio.

Es decir, no resultan aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios.

A mayor abundamiento, además del evidente daño moral, en el caso de autos nos encontramos con una violación de derechos esenciales de los demandantes por parte de agentes estatales, que hace surgir en la obligación estatal de reparar. Desde su fallo fundacional, la Corte Interamericana a sostenido (Velásquez Rodríguez vs Honduras) ha sostenido;

“175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos

humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Es claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos y a la integridad física”.



Foja: 1

Este estándar ha sido reiterado por la Corte en diferentes sentencias como Caso Ticona Estrada vs. Bolivia, párr. 59, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 85. Además, la Corte IDH en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas, sentencia de 27 de noviembre de 1998, expresamente sostuvo:

“138. La Corte considera que el daño moral a la víctima resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes como los que han sido probados en el presente caso experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión”.

La Corte afirmó lo mismo en el Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999, párr. 65.

4. En cuanto al monto de la indemnización.

Creemos totalmente ajustado a la justicia los montos demandados, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad y lo demostraremos oportunamente en el término probatorio, acreditando las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de mis mandantes.

Sin perjuicio de lo señalado, esta discusión inútil resulta puesto que será el tribunal quien determinará soberanamente el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses; por eso sólo me limitaré a constatar un hecho: los montos de las indemnizaciones se han ido incrementando y se está llegando a indemnizaciones reales y serias, sobre todo en aquellas demandas en las que es el Estado quien debe responder por graves crímenes cometidos en contra de sus propios ciudadanos.

5. Reajuste e intereses

Los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

En todo caso, también es una discusión que carece de sentido, porque los tribunales del fondo serán soberanos para fijar el momento desde el cual comienzan a reajustarse y devengan intereses los montos fijados como indemnización.

CUARTO: Que evacuando la duplica, la demandada, evacua lo siguiente:

I.- EN CUANTO A LA EXCEPCION DE REPARACIÓN INTEGRAL

Esta parte mantiene lo sostenido en el escrito de contestación de demanda, en cuanto a que el Fisco de Chile ha establecido diversas vías de reparación tanto a favor de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos como a beneficio de sus familiares más próximos, ya sea mediante actos concretos de reconocimiento como son los diversos memoriales levantados a lo largo del país en recuerdo de las víctimas, como a través del pago de indemnizaciones y otras prestaciones establecidas por las llamadas leyes de reparación, habiéndose hecho entrega de diversas sumas de dinero a favor de los actores de autos, tal como se



Foja: 1

señaló en el escrito de contestación de la demanda y se acreditará en la etapa procesal pertinente.

II.- RESPECTO DE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION

En relación a la excepción de prescripción opuesta por ésta parte, la parte demandante no advierte la importancia de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013 Sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que esta defensa transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda.

El pleno de la Excma. Corte concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

En efecto, desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

También la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Siguiendo con el criterio uniforme adoptado por la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema, basta recordar el fallo más antiguo dictado en esta materia. Es así como en la sentencia de casación en el fondo, de 15 de mayo de 2002, dictada en la causa “Domic con Fisco”, ingreso CS 4753-2001, se señala en lo pertinente:

“DECIMO TERCERO.- Que, en tal virtud, corresponde examinar concretamente si por tratarse de una responsabilidad estatal, reconocida en la Constitución y en la ley y, en tal carácter, sometida a normas de Derecho Público, es realmente imprescriptible y está marginada de la aplicación de las disposiciones que regulan la prescripción de una acción de indemnización de perjuicios como la deducida en la especie en contra del Fisco para obtener la reparación del daño moral sufrido por los actores;

DECIMO CUARTO.- Que, en torno a este punto, es útil tener presente que el hecho que ciertas responsabilidades se sometan al Derecho Público no obsta a que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo, en conformidad a disposiciones que se comprenden en el mismo sector del Derecho, porque lo



Foja: 1

cierto es que la prescripción no es ajena a esas normativas, atendido su carácter universal y puede operar en todas las disciplinas que pertenecen al Derecho Público, salvo que la ley o la índole de la materia determinen lo contrario. Ella afecta, así, a la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y municipales, que cesa por esa vía, según los artículos 151, letra d) y 152 de la ley 18.834 y 153 letra d) y 154 de la ley 18.883, respectivamente; a igual responsabilidad del personal de las Fuerzas Armadas que se extingue por la prescripción de la acción disciplinaria de dos años, con arreglo al artículo 156 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, de Guerra, o las acciones del Fisco en materia tributaria que regula el Título VI del Libro III del Código respectivo, aparte de la caducidad de las acusaciones en juicio político fijados en las letras a) y b) del artículo 39 de la Carta Política de 1925 y, actualmente, en la letra a) y el inciso tercero del N°2 del artículo 46 de la Constitución vigente y del cese de la responsabilidad del cuentadante cuya cuenta no es reparada en el plazo de un año desde su recepción por la Contraloría General, conforme al artículo 96 de la ley 10.336, entre otras situaciones de esta índole.

DECIMO SEXTO.- Que no solamente no hay norma positiva alguna que establezca la imprescriptibilidad genérica de la responsabilidad extracontractual del Fisco o de otra institución estatal, sino, por el contrario, el régimen jurídico nacional ha sancionado preceptos que admiten y regulan esa modalidad de extinción de las acciones indemnizatorias respectivas, entre ellos, el inciso tercero del artículo 63 de la ex Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por el decreto ley N° 1289, de 1975, actualmente derogado, que hacía prescribir en un año contado desde la fecha del perjuicio la responsabilidad extracontractual de los municipios y las normas del artículo 8° del decreto ley 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola, que fija igual término contado desde que aparezcan de manifiesto los perjuicios causados por trabajos del Servicio Agrícola y Ganadero para la prescripción del derecho a reclamar su indemnización y 17 de la Ley Orgánica Constitucional N°18.415, que contempla el mismo plazo, contado desde el término del estado de excepción para que prescriba la acción indemnizatoria en contra del Fisco que concede el mismo precepto;

DECIMO SEPTIMO.- Que la idea de aplicar las reglas de la prescripción extintiva que contiene el Código Civil a las acciones en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado no pugna a la naturaleza especial que ella posee, si se considera que ellas inciden en el ámbito patrimonial de esa responsabilidad y que en ausencia de normas positivas que las hagan imprescriptibles, corresponde estarse a las reglas del Derecho Común que se refieren específicamente a la materia, entre las cuales se encuentra el artículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre ella;

DECIMO OCTAVO.- Que esto no ocurre merced a una aplicación supletoria de dicha normativa, sino se produce directamente, por mandato explícito del legislador expresado en el artículo 2497 del Código Civil, que dispone que “sus reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”, extendiendo al Fisco, entre otras personas, sus normas sobre prescripción;



Foja: 1

DECIMO NOVENO.- Que la disposición citada en el considerando anterior nada tiene de insólita si se recuerda que el artículo 2521 del mismo Código Civil establece que “prescriben en tres años las acciones a favor y en contra del Fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”, porque al fijar un término especial de prescripción para las acciones relativas a ingresos tributarios del Estado y de los municipios, regidos por una de las vertientes del Derecho Público y que es distinto de los plazos establecidos para la prescripción de otras acciones o derechos en el mismo Código, denota la voluntad del legislador en orden a que el Estado y demás entidades indicadas en su artículo 2497 quedaron afectas a sus reglas referentes a la materia, a pesar de incidir en asuntos naturalmente propios del Derecho Público.”

Después de citar, en el considerando vigésimo a “versados tratadistas de Derecho Público” (Enrique Sayagués Laso, Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández) que han acogido sin mayores reservas la prescripción de las acciones en materias de Derecho Público, como es el caso de autos, agregan los sentenciadores:

VIGESIMO PRIMERO.- Que de lo expuesto en los motivos que preceden, se sigue que la aplicación de las reglas del Código Civil referentes a la prescripción extintiva a las acciones que se intentan en contra del Fisco y que no tienen un plazo especial de prescripción, obedece a un mandato explícito del legislador claramente consignado en el artículo 2497 de este cuerpo de leyes, sin que sea lícito practicar distingo alguno acerca de si se trata sólo de la responsabilidad contractual del Estado o si la norma comprende también su responsabilidad extracontractual, a falta de elementos de juicio que justifiquen tan indebida restricción al ámbito del precepto.”

Esta discusión ha quedado definitivamente zanjada en el fallo del Pleno de la Excm. Corte a que nos hemos referido tanto en el escrito de contestación a la demanda como en los párrafos precedentes del presente escrito.

QUINTO: Que la demandante, evacuando a fin de afirmar sus dichos, ha rendido la siguiente prueba a los autos:

i- Instrumental:

1.- Declaración jurada de Jorge Enrique Hurtado Martínez, que depone sobre el secuestro de don Ernesto Gutiérrez desde la cárcel pública por personal de la Fuerza aérea y las condiciones en que regresó a ese recinto.

2. Informe Protocolo de Estambul realizado por el Servicio Médico Legal, informa sobre facultades mentales de Celsa Beatriz Parrau Tejos, en la causa Rol 580-2010 de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de mayo de 2015. Suscrito por el médico Psiquiatra forense, Dr. Sergio Arancibia Vaccaro y por la Psicóloga forense, Sra. Sandra Montoya Squif. Copia digital del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (ex Ministerio del Interior).

3. Informe Psicológico, autorizado ante la 27º Notaría de Santiago, realizado a Mario Alburquerque Fuschini. Suscrito por el Psicólogo clínico, Sr. Germán Morales F, con fecha 3 de diciembre de 2021.



Foja: 1

4. Certificado médico, otorgado a Ernesto Gutiérrez Zegara, que acredita la atención de salud recibida durante siete años en el CODEPU. Suscrito por la Médico Psiquiatra, Dra. Patricia Barceló Amado con fecha 21 de enero de 2019. Copia autorizada de original entregado a la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech)

5.- Copia digital de Carpeta Valech entregada a la víctima por el INDH que contiene:

a. Certificación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que establece a don Ernesto Antonio Gutiérrez Zegarra como víctima en la Comisión Valech I

b. Ficha de ingreso de preso político y/o torturado a la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura

c. Carpeta rol 388-73 del Juzgado Militar de Santiago

d. Recorte de diario de nómina de exiliados autorizados a regresar entre quienes figura.

e. Declaración jurada de Jorge Enrique Hurtado Martínez, que depone sobre el secuestro de Don Ernesto Antonio Gutiérrez Zegarra desde la cárcel pública por personal de la Fuerza Aérea y las condiciones en las que regreso de ese recinto.

6. Copia libro "Jurisprudencia: Delitos contra la Seguridad del Estado. Consejos de Guerra". Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Volumen II, Tomo II. Pp. 9 a 38 sobre Consejo de Guerra Rol 1-73 en contra de 86 procesados

7. Copia libro "Jurisprudencia: Delitos contra la Seguridad del Estado. Consejos de Guerra". Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Consejo de Guerra Rol 388-73 en contra de Gutiérrez Zegara, Ernesto Antonio y otro.

8. Copia digital de Carpeta Valech entregada a la víctima por el INDH que contiene:

a. Ficha de ingreso de preso político y/o torturado a la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura

Copia digital de carpeta Valech entregada a la víctima por el INDH que contiene:

b. Certificación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que establece a doña Celsa Beatriz Parrau Tejos como víctima en la Comisión Valech I

c. Decreto exento N° 86 que prohíbe el ingreso al país de Celsa Beatriz Parrau Tejos

d. Ficha de ingreso de preso político y/o torturado a la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

ii.- Testimonial: Los que siendo explicados en sus derechos y sin tachas deducidas, depone: **a) Gonzalo Antonio de la Sagrada Familia de la Maza Escobar**, quien depone:



Foja: 1

PUNTO N°1

R: Sí, lo conozco. Lo conocí en el mes de marzo de 1972 cuando ingresamos en el mismo curso del Instituto de Sociología de la Universidad Católica a primer año.

PUNTO N°2

R: Si, tengo conocimiento de eso, lo que ocurrió en noviembre del año 1973 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, cuando tuvimos noticias de que fue detenido en circunstancias no regulares y luego de su reaparición tuvimos su propio relato de que había sido torturado y detenido ilegalmente sin que un proceso judicial específico lo afectara, creo que fueron 5 o 6 días en que estuvo detenido irregularmente. No especificó los maltratos a que fue sometido en forma específica, en esas circunstancias nadie comentaba directamente las situaciones específicas de torturas, sino que íbamos a las circunstancias, la vista vendada, los lugares a los que lo llevaban, que no se sabía cuáles eran, los interrogatorios violentos, pero por lo relatado todo lo que rodeo la detención indicaba que no hubo un procedimiento regular y las amenazas de las personas que tienen la capacidad de detenerlo constituyen un secuestro, al estar en un lugar desconocido y sin garantías para la persona que está sufriendo el maltrato, todo ello rodeado de una amenaza en función de su actividad política.

Punto 3

R: Considero que los daños fueron muy visibles y extendidos en el tiempo, diría que en su caso, como esto ocurrió al inicio de una dictadura militar se trataba de una situación que siempre podía volver a repetirse y por lo tanto él tenía un temor que se acentuaba por la represión continuada y por haber estado ya en esa situación, no podía alegar inocencia frente a una situación que se podía volver a repetir orientada hacia los militantes de izquierda, entre otros, entonces mi impresión es que ese temor se renovaba cada vez que se tenía conocimiento de una detención, de una muerte, como las que se producían en el tiempo de personas conocidas. Por lo que cada nueva detención agravaba su temor ya que en caso de detención su temor podía ser mayor. En cuanto al primer daño, está el sentimiento de temor que creo que no se extinguió hasta el año 1990 por lo menos por cuanto las prácticas represivas se mantuvieron. Quisiera agregar que además estaba la sensación de incertidumbre frente al futuro de lo que podía suceder, si las cosas se iban a agravar, si podía ser detenido nuevamente, también se produjo una sensación de desconfianza en las personas que lo rodeaban o que circulaban en su diario vivir, porque sabía que existía soplónaje y vigilancia. Por ello sus relaciones sociales se vieron muy afectadas, incluso con un cierto retraimiento.

Se afectó su vida estudiantil y profesional, ya por el sólo hecho de lo que estudiaba, sociología, generaba cierta sospecha, lo que se agudizaba por el hecho de que había sido detenido. Además, se produjo una inhibición de actividades normales o que deseaba realizar, como asistir a reuniones, circular por determinados lugares, ante la posibilidad de ser detenido.

Además no podría decir como la memoria traumática se ve afectada por esta situación.



Foja: 1

Punto 4

R: Creo que sí, hay varios de los que mencioné que no se extinguen en el tiempo, duraron durante todo el período de la dictadura militar con certeza y con posterioridad hay afectaciones del comportamiento, era una persona joven y por lo tanto eso se mantuvo. Considero que este daño ha sido permanente para Mario Albuquerque.

b) German Luis Baeuerle Rivera, quien depone: PUNTO 1

R. Si, lo conozco, desde el año 1972 cuando entramos a la carrera de sociología a la Universidad Católica en Santiago, en primer año.

PUNTO 2

R. Si, estando en una carrera como es sociología, debemos fijarnos en el contexto que en el año 1972 en plena presidencia de Salvador Allende, y la mayor parte éramos gente de izquierda y que pertenecían a partidos políticos, y cuando vino el golpe militar y en cuando todos volvemos a la universidad la situación es que no habían alumnos extranjeros y ver qué había pasado con cada uno de nosotros, así es como Mario nos cuenta que

los primeros días de noviembre de 1973, él había sido detenido en su casa por una patrulla militar y lo llevaron a la Academia de Guerra donde permaneció varios días, lo sacaron encapuchado, en su lugar de detención durante todos esos días fue interrogado, golpeado, y además de los daños físicos se le aplicaron daños psicológicos, porque le exhibían otros torturados para obligarlo a declarar. En la sala en que estuvo le ponían música muy fuerte, sin dejarlo descansar, estaba sentado todo el tiempo. El lugar físico donde estuvo lo identificó como la Academia de Guerra, pues me comento que vió a una persona con uniforme de la Fuerza Aérea.

PUNTO. 3

R. Mario era muy joven cuando fue detenido, 18 o 19, y lo que más le impactó fue que antes era muy tranquilo y racional, pausado, al volver, se convirtió en una persona nerviosa y asustada, apenas terminaba las clases, se iba rápidamente a su casa, le preocupaba mucho estar moviéndose de día para que no le llegara la noche, ya que tenía mucho miedo, además tenía siempre el temor de que esto le volviera a ocurrir a él o a alguien de su familia. Toda esta situación le afectó mucho y en toda su conducta que tenía en relación hacia nosotros, siempre se mantenía con una sensación de inseguridad, era una persona joven que debió vivir estas circunstancias muy difíciles que lo marcaron.

Pregunta 4

R: Por ejemplo, cuando nos volvimos a encontrar en Francia en 1980, estábamos conversando, algo paso en el lugar y llegaron policías, él se puso muy nervioso y se fue rápidamente a la casa, tenía mucho miedo, el actualmente sigue con temor, nunca sale a una marcha, se pone muy tenso y estresado ante cualquier situación, le cuesta revivir situaciones pasadas, esta con el temor incorporado, que lo ví en esa situación que antes manifesté.



Foja: 1

c) Nelly Patricia Doris Barceló Amado, quien depone y declara:

PUNTO 1

R. Yo conocí a Ernesto Gutiérrez por el año 2011 en que el consultó al equipo DITT (Denuncia Investigación y Tratamiento a Tortura del Codepu por presentar alteraciones de su ánimo, se encontraba muy deprimido, con alteraciones de la esfera ansiosa, insomnio, preocupaciones excesivas, en esa oportunidad, yo investigué bastante respecto de su situación vital y me di cuenta de que él había vivido una experiencia traumática en su juventud el año 1973. Relataba, que había sufrido presión policía y tortura, además cuando lo tomaron detenido iba con un amigo y los agentes dispararon y mataron a su amigo en el mismo lugar, a él lo tomaron detenido y llevado a distintos centros de detención, Estadio Nacional, AGA y otros, donde estuvo largamente detenido y sufrió torturas de distinto tipo, físicas, psicológicas, le infringieron torturas en las zonas genitales, lo que describió con mucha exactitud y muy afectado emocionalmente, incluso llorando cuando las relataba.

PUNTO 2

R. Si, lo ratifico, es mi firma la que aparece en dicho documento, es un documento que este joven me pidió por el año 2019. Lo que pasa con esta persona es que el consultó el año 2011, estuvo en terapia un par de años conmigo, después disminuyó sus síntomas, pero de nuevo recayó y cada vez que se enfrentaba a una situación estresante presentaba esta sintomatología, por lo tanto lo ví durante 7 años en tres oportunidades distintas por recaídas de estos episodios depresivo ansioso derivada de un estrés post traumático, que era propio de otras personas en situaciones de guerra en la historia.

PUNTO. 3

R: Esto síntomas son producto de sus torturas, estos son productos de traumas, como vivir situaciones límites, donde está en juego la vida, la integridad física y psicológica de la persona, ello afecta el aparato psicológico que no es capaz de evidenciar y resolver esas vivencias, son vivencias que en ese tipo de situaciones en todas las personas producen problemas, en algunos se repiten a través de pesadillas que recuerdan esa situación o de situaciones difíciles de enfrentar y se va recreando una sintomatología con su ánimo, hay mucha dificultad en mejorar su autoestima, dificultad interpersonal y mucha angustia y en Ernesto pasó todo eso. El recibió medicamentos aparte de terapias, porque su cuadro clínico era mayor, lo incapacitaba para las actividades de su vida diaria y laborales.

Punto 3 bis

R: Me remito a lo que he señalado en las preguntas anteriores.

Punto 4

R. En definitiva esta situación del estrés post traumático y las dificultades psicológicas, de integrarse en la sociedad, de pertenencia a los grupos, se sienten discriminados, parias de su propio país, no aceptados, todas ellas son situaciones diversas y en general no existe una personas torturada que no haya presentado



Foja: 1

algún tipo de aflicción psicológica y psiquiátrica, tienen mucha dificultad de integrarse a la sociedad, el exilio que vivieron y en definitiva son trayectorias vitales muy difíciles y complicadas

Pregunta 5

R: Para Ernesto estos daños se han mantenido en el tiempo, él tiene una red de apoyo afortunadamente, esos son factores protectores en él, hasta el año 2019, en que lo vi por última vez, aun arrastraba estos daños, con una fragilidad emocional aunque no con la misma intensidad que al principio.

d) LUIS PATRICIO MARTINEZ CARRASCO, quien depone: PUNTO 1

R. Si, lo conocí, cuando llegamos a estudiar el año 1967 en la Universidad de Chile y desde esa fecha hicimos la carrera juntos de ciencias políticas y luego lo he visto en distintos momentos de la vida.

PUNTO 2

R. Sí, tengo antecedentes de que fue detenido, torturado y estuvo además en la cárcel pública. Militábamos en el Partido Socialista y luego del golpe supe a través de distintas personas con las que manteníamos contacto de la muerte de Arnoldo Camú y que en ese hecho también estuvo involucrado Ernesto quién cayó detenido en ese episodio, luego supe que se encontraba en la cárcel pública y además supe con más detalle de sus situaciones sufridas, supe que había estado en el AGA y había sido torturado, lo ví recién el año 1984 cuando volvimos a Chile y allí me comentó las situaciones de apremio físico y torturas que recibió cuando estuvo detenido en el AGA, era una situación difícil quebrándose al relatarme su experiencia con respecto a todo lo que le había tocado vivir.

PUNTO. 3

R: Me consta, además de lo físico están los daños morales y mentales de lo que le significó dejar a su familia, ocultarse, son situaciones que marcan traumas en la vida, reconozco los apremios físicos que sufrió Ernesto porque me los relató y claramente eso le ocasionó daños, sufrió aplicación de electricidad, simulaciones de fusilamientos y otras situaciones que le toco vivir. Además que asesinaron a su lado a Arnoldo Camú, que iba en la camioneta con él cuando lo detuvieron y le dispararon a su lado, haciéndolo pasar por un supuesto intento de fuga.

Pregunta 4

R: Como señalé estos daños que no son solo físicos, a él le costó volver a ser lo que hacía originalmente y eso genera situaciones morales que se mantienen en la vida, quedó imposibilitado de ejercer su actividad profesional, nunca le permitieron reingresar a la universidad para sacar su título cuando volvió a Chile para poder ejercer su profesión y en su caso claramente le ha afectado pues ha debido realizar otras labores que no han tenido relación con sus estudios, además presenta un temor para enfrentar situaciones de desarrollo personal, por lo que claramente se nota un daño que le ví cuando lo he encontrado posteriormente. En esas circunstancias, no lo ví desarrollando una actividad relacionada con su formación profesional, además he notado en él temores por situaciones derivadas de lo que le tocó vivir.



Foja: 1

e) Pedro Tomás Lobos Sandoval:

PUNTO 1

R. Si, la conozco, la conocí en el colegio de enfermeras donde yo hacía asesorías profesionales, en el año 1988 a 1989.

PUNTO 2

R: Si, sé que fue detenida, me parece el año 1973 por agentes del Estado, la torturaron, en las conversaciones que tuvimos, supe que la amenazaron con dañar a sus hijos, detuvieron a su padre, a quién también torturaron en frente suyo, pero en detalle no sé otras cosas.

PUNTO. 3

R: Sí, la tortura está destinada a ello. En su caso, es un daño permanente que se ha mantenido hasta el día de hoy, daño moral temor a que puedan volver a hacerle lo mismo a ella, a sus hijos o a sus familiares, además tiene temor cuando sale a la calle, pues lo asocia con su detención y teme que por algunas acciones fuertes le provocan angustia, incluso por el estallido social ella lo asociaba a lo sufrido y sufrió un gran temor. Además todas las fechas conmemorativas le asaltan sus temores y dolores y todo lo que sufrió en esa época que no quiere que se repita para ella y su familia.

Punto 4

R: Se da en ella que cuando escucha sirenas, pasa un avión o los ruidos fuertes, ver uniformes, le hacen revivir sus temores, mantiene el temor que sufrió, y con el estallido revivió sus temores de que la parte uniformada actúe nuevamente, por lo que afloran sus dolencias y lo que a ella le ocurrió, lo que se le mantendrá para siempre, pues no es algo que se pueda olvidar así como así.

f) Mónica Iris Pérez Vera,

PUNTO 1

R. Sí, la conocí en reuniones en el Colegio de Enfermeras, porque yo diseñaba su red y ella colaboraba en la revista.

PUNTO 2

R. Si, claro que me consta, sé que lo estuvo porque ella lo manifestó en una de las reuniones en el colegio, sobre todo cuando se empezaron a hacer las conmemoraciones de las enfermeras detenidas desaparecidas. Comentó que había sido detenida en el año 1973 el mismo día del golpe, el 11 de septiembre en INDUMET, luego en el AGA y luego por Investigaciones, en tres ocasiones. Además señaló que había sido maltratada, vejada, la tuvieron sin comer y dormir, fue humillada.

PUNTO 3.

R: Sí, por supuesto, sé que ella quedó muy dolida, atemorizada por las amenazas que sufrió, por sus hijos y padre, en una de las oportunidades de la detención fue detenida al visitar a su padre preso y ese temor lo percibo que se ha



Foja: 1

mantenido hasta ahora, comentó que sufría pesadillas , o dormía bien, sobre todo en las fiestas conmemorativas del 11 de septiembre, cambiaba de actitud, se ponía triste, sudorosa, irritable, los sonidos fuertes la molestan, ahora nos hemos encontrado en las protestas del estallido social y sigue temiendo por la seguridad de sus hijos y ahora por sus nietos, una cadena que se ha mantenido en el tiempo de dolor y angustia y no ha tenido y creo no va a tener tranquilidad, eso es lo que yo he percibido en ella, además la encuentro resiliente con respecto a lo sufrido porque siempre está acompañando a compañeros a familiares, por ejemplo cuando quemaron a Rodrigo Rojas ella estuvo con su madre apoyándola a pesar del dolor que lleva a cuestas.

PUNTO 4

R. ya lo respondí anteriormente, por ejemplo, las veces que nos hemos encontrado, nos llamamos para ver si llegamos a la casa después de despedirnos, es vivir con el temor de ser amenazada de nuevo, torturada, detenida, se siente como perseguida, etc.

SEXTO: Que la demandada no rindió prueba alguna durante el proceso.

SÉPTIMO: Que del examen de los antecedentes, aparece de manifiesto que son hechos de la causa, por no haber sido controvertidos por las partes, el siguiente:

1.- Que con fecha 11 de septiembre de 1973 en una hora cercana a las 18 hrs, doña Celsa Parrau Tejos, fue detenida en INDUMET por agentes del estado. Fue golpeada subida y detenida junto a otros compañeros de trabajo. En dicho procedimiento les quitaron sus efectos personales y los trasladaron hasta la Comisaría de San Miguel. En este recinto los detenidos fueron separados por sexo. Las mujeres permanecieron en la Comisaría hasta alrededor de las 22 horas y posteriormente fueron conducidas hasta el Regimiento Tacna, ubicadas en un galpón y obligadas a permanecer sentadas en unas bancas sin respaldo. A intervalos, efectivos militares las atemorizaban y las insultaban. Les dieron una vez algo de comida durante los días en que estuvo detenida y debían que ir al baño acompañadas de un conscripto. Sólo interrogaron a una periodista de Radio Magallanes. Señala que ella y resto no fueron informadas de los motivos de su detención siendo detenidas en ese lugar hasta el día 14 de septiembre y nunca les fue devuelto sus útiles personales. En dicho lugar no sabía que había ocurrido con su familia.

Luego, con fecha 24 de septiembre de 1973, fue asesinado el marido de doña Celsa, don Arnoldo Camú Veloso, al ser detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia Naval y de Investigaciones y ejecutado al interior del vehículo en que era trasladado junto a Ernesto Gutiérrez, hacia el cuartel central de la Policía de Investigaciones. Don Ernesto Gutiérrez fue llevado a este recinto y Arnoldo Camú trasladado baleado a la Posta Central, donde se constató su muerte. Ese mismo día el domicilio de ella y de su marido fue allanado por efectivos de la Fuerza Aérea y cerca de las 21 hrs oficiales de la Fuerza Aérea de Chile e integrantes de su Servicio de Inteligencia, llegaron a casa de los padres de la demandante y luego de vendarle los ojos procedieron a detenerla. Fue conducida hasta la Academia de Guerra Aérea, AGA, en donde la dejaron sentada en una silla toda la noche, sin dirigirle la palabra. En dicho lugar fue víctima y testigo de



Foja: 1

torturas a otras personas y nunca le mencionaron que su marido había sido asesinado. Era amenazada constantemente, le decían que tenían vigilada a su familia, especialmente a los niños. Al cabo de dos días fue devuelta al domicilio de sus padres. Doña Celsa supo de la muerte de su esposo después de 15 días, tiempo en que el cuerpo de su esposo permaneció en el Instituto Médico Legal, a pesar de que ella concurrió en varias ocasiones a ver las listas y nunca apareció el nombre de su marido. Posteriormente supo que sí estaba registrado con su identidad al interior del Instituto Médico Legal y que había sido trasladado hasta el Patio 29. Su padre Oscar Parrau y su cuñado, David Camú Veloso, lograron encontrar el cuerpo y lo exhumaron de una fosa en la que había dos cuerpos más. No hubo funeral, se realizó una cremación como pidió Celsa.

En el mes de diciembre de 1976 el padre de doña Celsa fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones, llevado al Cuartel General de la institución, ubicado en General Mackenna. Una tarde al regresar a su casa, su madre le informó que efectivos de Investigaciones habían concurrido a detenerla, que no habían dejado orden ni informado el motivo de la detención, pero habían señalado que, si no se entregaba, su padre no saldría en libertad. Su padre continuó detenido en los que llamaban “la Patilla”, lugar donde tenían a muchos detenidos en completo hacinamiento, incluso debían sentarse por turnos, dándole preferencia a los mayores. Doña Celsa fue interrogada por sobre los mismos temas que había sido interrogada en la Academia de Guerra Aérea. Permaneció en una celda con otras mujeres alrededor de 12 días, posteriormente fue trasladada al Centro de Reclusión Femenino, ubicado en Vicuña Mackenna, como “presa común”. Fue llevada a Tribunales y liberada sin cargos. Después de esta detención, doña Celsa Parrau, debió abandonar el país y permaneció en el exilio hasta el año 1985.

2.- Que con fecha 24 de septiembre de 1973 don Ernesto Ernesto Gutiérrez fue detenido en la vía pública por agentes del Servicio de Inteligencia Naval y de Investigaciones en compañía de Arnaldo Camú Veloso, integrante del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Ambos fueron subidos en la parte de atrás de un automóvil y amarrados con una soga. Arnaldo Camú recibe una bala al interior del vehículo y es llevado agónico hasta la posta central. Sus familiares pudieron recuperar su cuerpo 15 días después. Don Ernesto y Arnaldo Camú fueron amarrados con una soga, con ambas manos unidas a la espalda, mientras los agentes los apuntaban con sus armas y los amenazaban. Fueron subidos en los asientos traseros del automóvil Fiat, Arnaldo quedó al lado de la puerta derecha, Ernesto en el centro y en el lado izquierdo uno de los agentes. El que fungía como jefe de la patrulla se ubicó en el asiento de copiloto. Los agentes recibieron instrucciones por radio, en el sentido que debían entregar a Ernesto en el Cuartel Central de Investigaciones, lugar al que se dirigieron. Los agentes iban con las armas en las manos.

Mientras se desplazaban por calle Amunátegui, pasado Huérfanos, logran desatarse y Arnaldo Camú intenta abrir la puerta para escapar, recibiendo de inmediato dos disparos a quemarropa que lo dejaron agonizando. Al llegar al Cuartel de investigaciones, don Ernesto fue entregado en la guardia, y los agentes, identificándose como funcionarios del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), dieron instrucciones expresas de que don Ernesto debía ser interrogado, por haber sido detenido en compañía de un miembro de la Dirección del Partido



Foja: 1

Socialista. Al bajar del auto, don Ernesto vio por última vez a Arnoldo Camú en estado agónico. Los agentes aprehensores fueron identificados en la causa Rol N° 518-2010, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por homicidio de Arnoldo Camú Veloso, sustanciada por el Ministro Mario Carroza.

En el Cuartel de Investigaciones, don Ernesto fue golpeado en reiteradas oportunidades y en distintas oficinas. Posteriormente su domicilio fue allanado y los funcionarios de Investigaciones encontraron literatura que consideraron “extremista”. Fue sometido a distintos interrogatorios vendado, en que sufrió aplicación de electricidad sobre una parrilla reiteradas veces. Agrega que residió varios días en una celda en un subterráneo oscuro y fétido, donde lo dejaron con un detenido por delito común. Luego de dos días sin comer, fue subido a un vehículo y conducido al Estadio Nacional, en muy malas condiciones físicas y emocionales producto de las torturas recibidas. Fue entregado a oficiales de Ejército encargados del Estadio, bajo el cargo de “terrorista peligroso”, con la indicación de que debía ser interrogado por un equipo especializado. Después de amenazas e intimidaciones, los militares ordenan mantenerlo incomunicado. Lo tomaron y lo dejaron tirado boca abajo, sobre un montículo de arena, situado frente a los camarines que servían de celdas para los prisioneros del Estadio Nacional, con vigilancia militar. Don Ernesto permaneció en esa condición hasta el día siguiente, cuando pudo moverse. Discretamente y sin que los guardias se dieran cuenta, ingresó a uno de los camarines y se mezcló con el resto de los prisioneros del lugar. Don Ernesto estuvo detenido en el Estadio Nacional hasta los primeros días de octubre de 1973, y luego junto a otras personas fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago donde estuvo hacinado junto a otros presos donde vivieron en condiciones inhumanas. Se le instruyó un Consejo de Guerra, acusado de actividades armadas extremistas, siendo condenado, a tres años efectivos de presidio menor en su grado mínimo. Durante la última semana del mes de noviembre de 1973, mientras permanecía en la Cárcel Pública, fue retirado del recinto por efectivos de la Fuerza Aérea y fue trasladado vendado hasta la Academia de Guerra Aérea. En este recinto fue interrogado y le preguntaban por la estructura de la organización que lideraba Arnoldo Camu y quienes lo sucedían en la dirección. Siempre encapuchado, fue llevado a un lugar donde, estando de pie, escuchó los gritos de una mujer que estaba siendo torturada. Luego lo llevaron a un lugar donde le entregaron papel y lápiz, con la instrucción que debía escribir lo que sabía, tras lo cual lo dejaron sentado en un pupitre contra la pared, en una sala en la que frente a él había un planisferio. En dicho lugar había pupitres con detenidos encapuchados como él. En la noche dormía en el suelo cubierto con una frazada que había llevado desde la cárcel. Dos días después lo llevan a un lugar desconocido. En ese lugar fue interrogado bajo tortura, fue colgado, amarrado de las manos y de los pies y le dicen que se había burlado de ellos por lo que había escrito. Le aplicaron electricidad y propinaron golpes en el cuerpo de manera reiterada, alcanzando a ver el magneto con el que generaban la electricidad que le aplicaban. La sesión de torturas fue larga, aunque no sabe cuánto tiempo duró. Uno de los agentes del SIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, se jactaba de dar trescientos golpes sin cansarse. Don Ernesto recuerda que llegó de regreso a la sala donde estaba su sitio en muy malas condiciones.



Foja: 1

Tras aproximadamente veintitrés días de permanencia en el centro de detención y tortura de la Fuerza Aérea, don Ernesto permaneció “desaparecido” para su familia y compañeros y fue regresado a la Cárcel Pública.

Durante su permanencia en la Academia de Guerra Aérea, AGA, don Ernesto sólo tuvo contacto visual con el suboficial González, el “chico González”, quien estaba en calidad de prisionero en la misma sala y a quien ubicaba en la cárcel, como parte del grupo que formaba parte del proceso contra personal de la Fuerza Aérea (Causa 1-73), con quienes coincidía en algunas actividades deportivas permitidas por Gendarmería, aun cuando estaban en distintas galerías.

En noviembre de 1974 se hizo efectiva la conmutación de pena y don Ernesto salió del país con pena de extrañamiento a Argentina, país en el que residió hasta el mes de abril de 1976. Tras el golpe de Estado, don Ernesto debió abandonar el país por la falta de seguridad para los exiliados chilenos, por lo que viaja a Venezuela, país en el que logró reunirse con su familia en diciembre de 1976. Regresó a Chile en noviembre de 1984, separado de su esposa. En su regreso a Chile, no pudo ejercer en la administración pública. En septiembre de 1973, su esposa estaba en Argentina, embarazada. Don Ernesto tenía pasajes para asistir al nacimiento de su hija en Buenos Aires. Nació el 17 de octubre de 1973, cuando don Ernesto ya se encontraba en prisión. Conoció a su hija a los nueve meses, al interior de la cárcel de Capuchinos (los presos políticos acogidos a la conmutación de penas, pasaban por Capuchinos antes de embarcarse con rumbo a los países de acogida).

3.- En noviembre de 1973, Mario Alburquerque estudiaba sociología en la Universidad Católica de Chile y era integrante de la Dirección Local Cordillera del MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que abarcaba la zona oriente de Santiago. Personalmente estaba encargado de re-estructurar el MAPU en la comuna de Las Condes. Fue detenido el 5 de noviembre de 1973, por una patrulla de militares compuesta por un oficial y 3 soldados, sin orden judicial o administrativa alguna. Lo subieron y amarraron a un jeep, sin decirle nunca los motivos de la privación de libertad ni la institución a la que pertenecían, identificándose solamente como militares. De hecho, pudo saber que había sido trasladado a la Academia de Guerra Aérea, en donde estuvo cinco días, siempre con la capucha puesta, cuando por debajo de ella, pudo ver que los utensilios de la alimentación tenían el logo de la FACH. Fue instalado en una oficina pequeña y vacía del subterráneo y los interrogatorios se realizaron en el salón de actos del edificio. Muchos años después, ya recuperada la democracia, pudo ir a la Academia de Guerra Aérea y reconocer los lugares donde permaneció recluido. Las torturas consistieron en amenazas de muerte, golpes de puño en todo su cuerpo, aplicación de electricidad en los genitales y tetillas, aislamiento, sin permitirle dormir ni acudir al baño para realizar sus funciones fisiológicas. Asimismo, debió estar presente durante la tortura a otro detenido al que no conocía, al que le aplicaban electricidad en los testículos, en medio de un interrogatorio. Los agentes amenazaban a Mario con el mismo método u otros peores. La amenaza sobre su vida era permanente, le hacían ver que nadie sabía dónde estaba y ni siquiera quién lo había detenido, Mario considera que era una forma de hacerle ver, que podían hacer con él lo que quisieran. La mayor parte del tiempo debió permanecer sentado frente a un escritorio, incluso debía dormir en esa postura. Excepcionalmente, le permitían descansar en un colchón, que era



Foja: 1

compartido con otros prisioneros. Había una radio encendida durante toda la noche.

Luego de cinco días fue sacado del lugar junto a otros dos detenidos que fueron dejados en la Cárcel Pública, a él, en cambio, lo condujeron hasta el Ministerio de Defensa, en donde un oficial de Ejército le indicó que sería dejado en libertad, advirtiéndole que ya lo conocían y que debía abandonar toda actividad política, ya que, si persistía en ella, sería nuevamente detenido y las consecuencias esa vez sí serían graves.

2.- Que los actores sufrieron vejámenes y torturas y graves amenazas de muerte que les causaron secuelas físicas y psicológicas que permanecen hasta la actualidad, y que les ha significado grandes dificultades para desarrollarse como personas en sus aspectos personales, familiares, laborales y sociales.

3.- Que los actores fueron reconocidos como víctimas de violaciones a los Derechos Humanos incluido en la nómina contenida en la Comisión Verdad y Reconciliación o “Comisión Rettig”, en su Informe Final.

OCTAVO: Que previo a pronunciarse el Tribunal sobre las diversas alegaciones de las partes, resulta fundamental para esta sentenciadora señalar que el caso de marras versa sobre indemnización de perjuicios reclamada al Estado de Chile, a partir de violaciones a los derechos humanos en la comisión de delitos denominados de lesa humanidad o crímenes de guerra, cometidos por agentes del estado en su representación y financiados por este, cuyas actuaciones son reconocidas, en el caso de marras, a partir del informe emitido por la Comisión Valech en el mes de agosto del año 2011.

NOVENO: Que a partir de lo anterior, el Estado de Chile efectuó un reconocimiento de la comisión de estos ilícitos a través de la Comisión ya nombrada.

La responsabilidad estatal versa en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, conformes a los cuales el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, recogiendo y aplicándose entonces lo preceptuado por el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 18.575, como el derecho de toda víctima a ser reparada en los daños causados “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado”, principios y derechos refrendados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia.

DÉCIMO: Que, si bien la responsabilidad del Estado se funda en los artículos citados, la integración de instrumentos Internacionales que versan sobre Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, a través del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política, impide al Estado aplicar el derecho interno con el fin de eludir su responsabilidad, debiendo reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental que por su naturaleza, la acción que pretende su resarcimiento, es imprescriptible. Ya lo señala la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema: “A mayor abundamiento, se señala que el artículo 5.2 de la Convención



Foja: 1

Interamericana de Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos; y si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece a su índole humanitaria, en protección a los derechos humanos, reconocidos en la norma internacional citada, que primea sobre la preceptiva de derecho interno, en especial el artículo 2497 del Código Civil.” (Fallo Rol C-2289-2015, 29 de marzo de 2016).

UNDÉCIMO: Que en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva opuesta por la demandada, indicando que el actor es beneficiario de las prestaciones ideadas por el Estado a través de la Ley 19.123 y 19.922 y en razón de ello ya existe una reparación del daño, esta sentenciadora considera que la calidad de víctima no es excluyente de la pretensión indemnizatoria de la presente acción, toda vez que las medidas de las leyes indicadas fueron creadas de forma general sin consideración a cada caso en particular, sin poder presumir que el Estado a través de dichas efectuará una reparación íntegra del daño causado.

Que a mayor abundamiento, que el Estado asuma su participación y colaboración en los hechos y pretenda el cumplimiento del deber de resarcimiento para con las víctimas, no importa para ellas la renuncia de sus formas, ni exclusión de otras medidas de reparación.

DUODÉCIMO: Que sobre la excepción de prescripción de la acción invocada por la demandada, dicha solicita la aplicación de las normas del Código Civil en virtud de justificar la existencia de ésta a fin de otorgar certeza de las relaciones jurídicas, el resguardo del patrimonio y la libre circulación de los bienes, no obstante, imperativo resulta señalar que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha reiterado que en el caso de delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible, resultando contradictorio y poco coherente que la acción civil no siguiera este mismo razonamiento.

Lo anterior resulta comprensible a partir de que el hecho lesivo consiste en un crimen de guerra o delito de lesa humanidad, especialmente contenido en el artículo 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que son parte integrante del ordenamiento jurídico nacional por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO TERCERO: Que la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo N°355 de 1990, del Ministerio de Justicia tuvo por objeto, conforme a su artículo 1°: "...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años", procurando en cumplimiento de dicho cometido, establecer un cuadro lo más completo posible sobre los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.

A su vez, la ley N° 19.123, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, correspondiéndole esencialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas.



Foja: 1

Por Decreto N°1040, de fecha 26 de septiembre de 2003, se dispone la creación de la Comisión Valech, que tendría la finalidad de asesorar a la presidencia de aquel entonces y suplir información faltante y deficiencias de la Comisión Rettig, que solo contemplaba quienes habían muerto a manos de agentes del estado durante el período de dictadura militar, incluyéndose ahora los casos de prisión y tortura que no fueron contenidas en el informe anterior.

El informe Valech contiene la nómina de víctimas establecida por la Comisión y ha servido de base a los beneficios dispuestos por la Ley N° 19.992.

En estos informes, se reconoce la calidad de víctimas de doña Celsa Parrau Tejos, don Ernesto Antonio Gutiérrez Zegala y don Mario Alburquenque Fuschini, y siendo por tanto declarados víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

DÉCIMO CUARTO: Que según la jurisprudencia y doctrina, en un sentido casi unánime, señala que la acción penal resulta imprescriptible, no resultando aplicable las normas civiles de prescripción de la acción, por resultar contrario al sistema Internacional de los Derechos Humanos, entendiéndose integrados a nuestro Ordenamiento Jurídico por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, asumiendo por ello el Estado chileno la obligación de instaurar el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a la reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito. Que a esto es lo indicado en el artículo 1° de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, que establece que estos delitos son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

Que a mayor abundamiento, la ley 19.123 justifica su creación en el reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se perpetraron en el país, a las familias de aquellos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que fueron víctimas directas de acciones realizadas por agentes del estado, a través de regalías de carácter económico o pecuniarias.

DÉCIMO QUINTO: Que resulta fundamental para un estado de derecho democrático otorgar un tratamiento especial a los casos de crímenes de lesa humanidad en los que tuvo participación y activa colaboración del Estado, aplicándose a este una prolongación en el deber de reparación integral de las víctimas.

DÉCIMO SEXTO: Que a lo anterior, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deber hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad.

Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante



Foja: 1

interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes Cada Parte Contratante tomar las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculpados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio”; y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la demanda efectuada por el demandado en contra del Fisco, tiene asidero en los ejes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose Chile suscrito a dichos, obligándose al reconocimiento y completa protección al derecho de íntegra reparación de los daños provenientes de estos delitos.

DÉCIMO OCTAVO: Que bajo este prisma de protección y aplicación del derecho internacional, no es aceptable el cuestionamiento a la aplicación normativa que verse sobre Derechos Humanos, y menos aquellas que ordenan la reparación por parte de los Estados, bajo el argumento de la protección del derecho interno, por cuanto se compromete la responsabilidad del Estado de Chile, de los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, así como el principio de buena fe comprometido con las normas *ius cogens* o costumbre del Derecho Internacional.

Que a esto, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, razones suficientes para rechazar las excepciones de reparación satisfactoria, de prescripción extintiva de la acción y en subsidio las alegaciones vertidas por la demandada.

DÉCIMO NOVENO: Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado, y la circunstancia de detención, prisión política y tortura de doña Celsa Parrau Tejos, don Ernesto Antonio Gutiérrez Zagarra y don Mario Albuquerque Fuschini, todos estos registrados en el informe y comisión de verdad N°18.362, 10.987 y 964, respectivamente.

VIGÉSIMO: Que la responsabilidad trae aparejada la indemnización o reparación de los daños sufridos por los actores.



Foja: 1

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que ha causado el agravio

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la referida cantidad ordenada pagar, se efectuará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, pues que, en efecto, la obligación de indemnizar es declarada con la dictación de esta sentencia, y el reajuste tiene como exclusivo objeto morigerar los efectos de la inflación.

Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y artículos 144, 170 y 254 y siguientes, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que el Estado de Chile debe pagar a cada uno de los demandantes, a modo de indemnización de perjuicios por daño moral, a doña Celsa Parrau Tejos, don Ernesto Antonio Gutiérrez Zegala y don Mario Alburquerque Fuschini, la suma de \$100.000.000, con los reajustes que se indican en el considerando vigésimo segundo.

II.- Que por resultar totalmente vencida la demandada, se le condena al pago de las costas.

Regístrese.

C-16210-2019

PRONUNCIADA POR DOÑA JACQUELINE IVETTE BENQUIS MONARES,
JUEZA TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Mayo de dos mil veintidós**



